ISSN: 1139-0107

ISSN-E: 2254-6367

MEMORIA Y CIVILIZACIÓN

ANUARIO DE HISTORIA

23/2020

REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE HISTORIA,
HISTORIA DEL ARTE Y GEOGRAFÍA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Faustino Martínez Martínez

La nueva vida constitucional en 1869: entre (más) derechos y
(menos) poderes

The New Constitutional Life in 1869: Between (more) Rights and (less) Powers
pp. 127-165

DOI: <https://doi.org/10.15581/001.23.006>

Universidad
de Navarra

La nueva vida constitucional en 1869: entre (más) derechos y (menos) poderes

The New Constitutional Life in 1869: Between (more) Rights and (less) Powers

FAUSTINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Universidad Complutense de Madrid
fmartine@der.ucm.es

RECIBIDO: ABRIL DE 2020

ACEPTADO: JUNIO DE 2020

DOI: <https://doi.org/10.15581/001.23.006>

Resumen: La Constitución de 1869 marca un hito dentro de nuestra Historia Constitucional por ser el primer texto abiertamente progresista y liberal de toda la centuria, centrado en los derechos y no en los poderes, tanto en el aspecto cuantitativo como también en el cualitativo —defensa, restricciones, límites, garantías de tales derechos—. En suma, una Constitución diferente que es obra de un poder nacional auténticamente constituyente y que diseña un escenario ciudadano e institucional más avanzado. Otra cosa será la puesta en marcha de este nuevo edificio político.

Palabras clave: Constitución. Constitucionalismo. 1869. Revolución Gloriosa española. Derechos. Libertades. Progreso. Democracia.

Abstract: The Constitution of 1869 marks a milestone in our Constitutional History for being the first openly progressive and liberal text of the whole century, focused on rights and not on powers, both in the quantitative and qualitative aspects —defense, boundaries, limits, guarantees of such rights—. In sum, a different Constitution that is the work of a genuinely constituent national power and that designs a more advanced citizen and institutional scenario. Another thing will be the launch of this new political building.

Keywords: Constitution. Constitutionalism. 1869. Spanish Glorious Revolution. Rights. Freedoms. Progress. Democracy.

INTRODUCCIÓN

El propósito de las líneas que siguen no es tanto establecer una comparación entre las Constituciones moderadas, especialmente, la más duradera y doctrinaria de ellas (la de 1845), y la Constitución absolutamente novedosa de 1869, sino, más bien, tratar de reconstruir la secuencia temporal que conduce de las primeras a la segunda, revolución mediante, o, lo que es lo mismo, tratar de presentar de una forma medianamente ordenada el tránsito que supone el caminar desde el Constitucionalismo moderado, trasunto del pensamiento doctrinario, agotado en el último período del reinado de Isabel II, exhausto y sin referentes políticos sólidos para apuntalar el régimen, en dirección hacia el Constitucionalismo progresista, más claramente liberal y ciudadano, de efímera existencia, pero de honda huella en la historia política española por las múltiples implicaciones, novedades y hallazgos que puede presentar en su corta hoja de servicios. Una Constitución que muere casi en el acto por causa del uso excesivo de todos aquellos derechos y libertades que decía encarnar y plasmar por vez primera en su escenario político propio, fruto de una aceleración histórica que no pudo prever, ni tampoco contener. Pero, ahí, en los derechos y libertades ciudadanos, está la cifra exacta de su singularidad histórica y el factor que debe ser reivindicado para apuntalar su papel dentro de nuestro constitucionalismo.

¿Cómo se articuló esa transición? En efecto, desaparecidos O'Donnell y Narváez, rotas las filas de los principales partidos gobernantes, fragmentados en innumerables facciones, y culminado su proyecto político, que apenas podía ofrecer nada novedoso fuera del estricto orden público exhibido en esos últimos tiempos —bajo la forma de la represión y del escaso diálogo—, lo cierto es que el mundo moderado parecía haber dado lo mejor de sí y se mostraba como un cadáver que gozaba de excelente salud, pero que no dejaba de ser un cadáver; algo inerte. Frente a este moderantismo agonizante, se erguiría una oposición unificada, con unos odios concretos y orientados, pero también con un proyecto definido en positivo que traía consigo la imperiosa necesidad de revisar el mundo constitucional, comenzando por la propia concepción del valor de la Constitución, texto que debía articular el mundo de los poderes y, especialmente, el mundo de los ciudadanos.

Por eso, veremos que el constitucionalismo progresista (1) se definirá y ejecutará por oposición a todo lo que el constitucionalismo moderado implicaba, a modo de una lectura velada y alternativa de un negativo fotográfico de éste, en clave de ciudadanía y ya no de instituciones. Ese constitucionalismo moderado (2), el contrapunto, no había podido introducir novedades sustanciales en España, homologables a las europeas, por su peculiar concepción del mundo político, por

lo que la reacción de 1868-1869 decantaba ahora la balanza hacia la libertad en vez de hacia el orden, e iniciaba la construcción de un sistema fundado en una Constitución que comparecía por vez primera en nuestra Historia, con la sola salvedad, acaso, de Cádiz, a modo de auténtica norma jurídica, primera y superior, invocable en y ejecutable por los tribunales y jueces, por ese Poder Judicial que se definía también como auténtico poder y no simple Administración de Justicia. La separación de poderes, orgánica y funcional, era asimismo un hecho inquestionable desde esa fecha.

A partir de ahí, todo era novedad, matizable por ciertas inercias y resistencias al cambio procedentes del campo religioso, moral o de las buenas costumbres (3), novedad que bebía del mundo europeo —la Bélgica y la Francia revolucionarias de 1830 y 1848, respectivamente— y también del americano —la siempre presente y efectiva Constitución Federal de 1787—, puesto que se iniciaba un recorrido teñido de preocupación ciudadana antes que de apuesta por los poderes públicos, lo que se demostraba en un primer título que recogía muchos, buenos y variados derechos y libertades, con un recorrido que exhibía sucesivamente, como trataré de esbozar,

(1) unos viejos derechos civiles —la libertad como seguridad personal y la propiedad privada—, aunque mucho mejor presentados, definidos, contruidos en suma, desde el punto de vista lingüístico y también conceptual, lo que se percibe con claridad a la hora de perfilar de un modo muy preciso, casi quirúrgico, las eventuales limitaciones a esos derechos por parte de la autoridad —ahora sí, de modo casi exclusivo— judicial; la Constitución hablaba fijando esas fronteras con el objeto evidente de reducir el margen de acción del Gobierno, quien se había comportado con tales derechos con una discrecionalidad rayana en lo absoluto hasta prácticamente hacerlos nulos y dejarlos sin efectos;

(2) unos derechos políticos, absolutamente novedosos, que respondían esencialmente a la nueva concepción del ciudadano, reputado no solo como un hombre libre y propietario, que dirigía su propio destino en su propio hogar, sino que también podía salir de su solipsismo y condicionar el cómo de la labor política, que podía decidir quién y cómo debía gobernar, al mismo tiempo que se establecían las condiciones para auspiciar el surgimiento de una opinión pública y de un espacio igualmente público de debate, que tendrían como consecuencia inmediata la aparición de una nueva cultura política. Por estos territorios de lo político, aparecían el sufragio, las asociaciones, el derecho de reunión, la petición, la libertad religiosa, la de educación, la igualdad, etc.;

(3) todo esto bajo dos presupuestos indiscutibles que acaso son, bajo mi modesto parecer, los dos logros más relevantes que la Constitución introduce en nuestro periplo decimonónico, algo a lo que la doctrina historiográfica no ha prestado especial detenimiento y atención: de un lado, derechos y libertades no

pueden estar condicionados en su ejercicio de forma preventiva, sino solamente represiva y *a posteriori*, lo que quiere decir que son potencialmente ilimitados hasta la emergencia de alguna limitación legal tras su primer ejercicio; y, de otro, derechos y libertades no se agotan en el catálogo que la Constitución anunciaba en su arranque, sino que, copiando del modelo norteamericano y como concesión a un cierto iusnaturalismo más laico que católico, la enumeración era meramente ejemplificativa y los restantes derechos del hombre seguían estando presentes en el ambiente político, jurídico y constitucional, aun cuando no se reflejasen por escrito, ni figurasen en ningún precepto de una forma expresa.

Y, por fin, (4) llegamos a otro cambio consistente en la amputación de la libertad que el Gobierno había tenido para suspender derechos y libertades de forma irrestricta, algo que había sido regla general antes que excepción, lo que se plasmó en la práctica en una apuesta decidida por la responsabilidad pública y por la necesidad de una doble ley para proceder a ese recorte de derechos y libertades. Entroncaría esta solución con una marcada decisión del constituyente de 1869 por unas instituciones más incardinadas en un modelo liberal de tipo más avanzado, menos moderado, que caminase por la auténtica separación de las instancias, por la reivindicación de un Parlamento más activo en cuanto a función legislativa y de control, por una Monarquía de menores poderes e ínfulas, y con un Gobierno sometido a estricta vigilancia, amén de unas instituciones provinciales y locales a las que se dotaba por vez primera de una relativa autonomía. Pero lo más relevante de esto fue el diseño de ese Poder Judicial, que logra ciertos visos de independencia, de imparcialidad y de inamovilidad, algo impensable en el ideario liberal hasta entonces dominante. Un Judicial que logra ser auténtico poder y no apéndice de otros.

El problema fue, a modo más de reflexión abierta que de conclusión, que el sistema no pudo, no supo o no quiso plasmarse en la práctica: la lucha fratricida entre partidos imposibilitó de todo punto la ejecución de este programa constitucional y lo condujo a un fracaso total y sin paliativos. Ello provocó la recuperación en 1874 del viejo modelo político y constitucional moderado, ahora bajo los ropajes del conservadurismo canovista, que no era más que una versión ajustada o perfeccionada del anciano modelo moderado, limando los defectos y los excesos advertidos en esos años centrales de la centuria.

Para el desarrollo, pues, de estas reflexiones vamos a tomar como punto de partida el primer nivel textual que conforma la Constitución de 1869, acudiendo directamente a sus palabras, a la luz de su significado originario en el contexto de la Gloriosa; sin perjuicio de lo cual, en ocasiones, se puede llegar a un segundo nivel, cual es el integrado por los debates parlamentarios constituyentes, donde se presentan, debaten y decantan las principales decisiones incor-

poradas luego al texto constitucional. El Derecho son textos de intensidad obligatoria variable, transmisores de mensajes coercitivos o permisivos, siempre imperativos, y orientados a la regulación de la vida social con arreglo a ciertos valores y principios, pero que dependen para su cabal comprensión del contexto. Esto es, la Constitución de 1869 debe ser leída a la luz de sus circunstancias particulares con arreglo a la situación agónica del régimen isabelino y a la esperanza que el mundo progresista parecía traer consigo, dentro del más amplio fresco que supone nuestro complejo siglo XIX.

I. PRIMER ACTO: PROLEGÓMENO

La Revolución Gloriosa o Septembrina supuso el intento más realista, más tangible y más duradero del progresismo patrio para llevar a la práctica su ideología por la única vía que permitía el control, prácticamente absoluto, del Moderantismo de los resortes del poder político: el levantamiento militar. Era el modo usual de esos momentos a uno y a otro lado del arco parlamentario. No había otros caminos, ni alternativas. No era novedad, por tanto, el medio, pero sí los fines. El movimiento iniciado en Cádiz en septiembre de 1868 fue, por fin, auténtica revolución, esto es, contundente giro del orden político, social y jurídico, violento, incontrolable, con abierto cuestionamiento del estado de cosas, con derivas radicales y llamadas al orden y a la moderación desde arriba, las que acababan por consolidarse y por consolidar el mundo recién inaugurado¹. Y supuso además la plasmación por vez primera de un programa constitucional novedoso que, en cierta forma, suponía una enmienda a la totalidad, una revisión o impugnación general a todo lo que hasta entonces los moderados habían edificado desde el lejano año de 1834 y con el ejemplo arquetípico del texto constitucional de 1845, el vigente en aquel entonces. Ahí hallamos, sin lugar a dudas, el prototipo de constitucionalismo conservador contra el que se revuelve el mundo progresista en la fecha indicada, tras años de silenciosa oposición e incomparecencia. Dicho de otro modo: el constitucionalismo progresista se diseña por contraposición al moderado anterior, con el objeto de condenar y proscribir los abusos y

¹ Lida y Zavala, 1970; Jover, 1976; López-Cordón, 1976; Guereña, 1980; Fontana, 1983; De la Fuente Monge, 1987, 2000 y 2002; Oliet Palá, 1989; Piqueras Arenas y Sebastià Domingo, 1991; Baldó Lacomba, 1995; Serrano García, 2001; o el completo dossier «Revisitar la Gloriosa» de la revista *Ayer*, 112, 2018, a cargo de Rafael Villena Espinosa. Más recientemente, el libro editado por González Madrid, Ortiz Heras y Pérez Garzón, 2017, dedicaba su Taller 9 a las cercanías de una conmemoración, refiriéndose a los 150 años de la Revolución Gloriosa (1868-2018), pp. 965-1135, con algunas colaboraciones relevantes a los efectos de este trabajo, como las de Delgado Idarreta y Viguera Ruíz, Dupont, Giner Lillo, Higuera Castañeda y Sánchez Collantes, además de la cuidada Introducción elaborada por Villena Espinosa y Serrano García. Para los textos más relevantes del período estudiado, De la Fuente Monge y Serrano García, 2005.

fraudes imputables al segundo, y de buscar un contrapunto ideológico y conceptual a aquél. Serán dos modelos antitéticos, pero necesarios porque uno no puede existir sin el otro². ¿Cómo se había llegado a esta situación? El orden y la libertad, los dos conceptos básicos del primer ideario liberal, habían dado lugar al triunfo del primer factor, sin contemplaciones durante buena parte de la centuria; ese orden que implicaba disciplina, protección, conservación, equilibrio, contención, con silenciamiento del ciudadano y de su estatuto jurídico particular con unos perfiles más abiertos y políticos.

Los nuevos tiempos inaugurados en 1868 caminaban hacia una afirmación del segundo factor, el de la libertad, concebida en el sentido de autonomía personal, social y política, con proyección fuera del círculo más íntimo, privado y familiar de cada sujeto, para ascender a las cimas del Estado y, desde allí, proceder a su correcta dirección. El pensamiento liberal giraba, por fin, hacia la libertad y hacia los derechos, lo que de inmediato iba a traer consecuencias aparejadas para los poderes, para las instituciones. La fundación y primigenia evolución del régimen liberal en Europa había dado prioridad, en un primer instante, a los derechos civiles, con la libertad personal y la propiedad privada como elementos esenciales de cara a la construcción de la sociedad burguesa. Se buscaban las libertades negativas, aquellas que implicaban un espacio de clara inmunidad para cada individuo, donde el Estado no podía hacer su aparición bajo ningún concepto, salvo restricciones legítimas que debían ser refrendadas por disposición legal en la que se suponía intervenían los mismos sujetos auto-limitándose a través de normas generales, nunca privilegios particularizados. El individuo había construido un refugio donde el poder no podía hacer su entrada. El Estado se detenía ante el hogar, la propiedad, la familia o el cuerpo físico de cada sujeto, salvo habilitación legal expresa con su correspondiente justa causa y su necesidad contrastada. Al contrario, su razón de ser última, la del Estado, radicaba en la protección de todos estos componentes. Su defensa y promoción fueron la marca de fábrica del liberalismo moderado, aquel que quería dar mayor protagonismo a la sociedad frente a la máquina estatal, pero sin diluirla. Para ello, el Estado se presentaba

² Artola Gallego, 1979, p. 2, quien nos advierte que entre 1837 y 1931 solamente existió, de continuo, un único texto constitucional. Para el constitucionalismo isabelino, además de los manuales de Historia constitucional y de Historia del Derecho al uso (citados supra, nota 22), se recomiendan dos magníficas síntesis: Tomás Villarroya 1981a, 1981b, 1983 y 1984, que luego desembocan en el texto de 2012, y Pérez-Prendes, 2017, pp. 167-175. Para el conglomerado ideológico, aglutinado alrededor del Partido monárquico-constitucional, vulgo el Partido Moderado, hay que volver siempre a Cánovas Sánchez, 1982, amén de los trabajos más específicos sobre el mundo liberal hispánico, entre los que debemos destacar a Comellas, 1962 y 1970, Suárez Cortina, 2003; Moliner Prada, 2005; los dosieres de las revistas *Historia y Política*, 17, 2007, («El Liberalismo español», coordinado por Manuel Suárez Cortina») e *Historia Contemporánea*, 43, 2011 («Doctrina y práctica del Liberalismo: la cultura liberal», dirigido por Manuel González Portilla); y Romeo Mateo y Sierra, 2014.

como tutor de aquella, aunque sin posibilidad de inmiscuirse en su funcionamiento regular, que seguía otros cauces. Debía garantizar que operasen los buenos ciudadanos burgueses de forma libre, sin injerencias públicas de ninguna clase —de ahí, el papel clave de los Códigos reguladores del Derecho privado al que se acogía esta sociedad burguesa y la amplitud de facultades que conferían a esos ciudadanos proyectos—. Había que dejar hacer, que dejar pasar, para lograr ese objetivo «guizotiano» del enriquecimiento general: todos propietarios, todos capitalistas como modelo final ansiado, como modo de progreso que originaría un inmenso bienestar global. El cómo del poder o su titularidad exacta no eran para nada relevantes. El poder estaba ahí, como algo histórico antes que natural, resultado del pasado, y su acción era mínima, casi automática, fruto de ajustes que se daban en el tiempo, y además intercambiable, en el sentido de que no tenía trascendencia qué facción particular gobernase. Todos los partidos o todas las sensibilidades del lado liberal compartían un *corpus* ideológico común y se diferenciaban más por los tiempos y los ritmos de las reformas que por el sentido íntimo de las reformas mismas³.

Pero a mediados de la centuria comenzó una preocupación y una reivindicación por los derechos políticos, como si la sociedad madurase y tomase conciencia de sí misma y de la posibilidad de domeñar al Estado y hacerlo su servidor. La sociedad no era algo pasivo, sino que podía condicionar el movimiento de lo público, la dinámica estatal, lo que el Estado tenía que hacer. Para articular ese asalto pasaron a un primer plano los derechos llamados *políticos*, los positivos, aquellos que implicaban una salida del reducto donde estaba recluido el ciudadano, y una apertura de miras con el objeto de participar en la formación de la voluntad nacional y también estatal. El Estado no era neutro, sino que era determinado en sus funciones y direcciones por la ciudadanía. El individuo interesaba en sus relaciones con todo lo restante y con los demás, incluido asimismo el poder, el cual no solamente no interfería en la vida particular de cada sujeto, sino que estos en su conjunto, al contrario, podían condicionar el modo de actuación de aquel. Tenían casi la obligación de hacerlo. Sufragio amplio o menos censitario, asociación, reunión, petición, pero también la libertad de conciencia, religiosa o educativa, por citar algunos ejemplos señeros, pasaron a un primer plano en las reivindicaciones. El ciudadano que interesaba no era ya el simple propietario, varón, buen padre de familia, recluido en la tranquilidad de su hogar, pasivo, ordenado y calmado, sino, además de todo lo anterior, el que era políticamente

³ Acerca de este modelo constitucional moderado y conservador, que hunde sus raíces en la Restauración francesa y que mira la moderación política británica como destino a alcanzar, Fioravanti, 1993, pp. 151-184; y 1995, pp. 99-141 [con su correspondiente traducción española, 2003, pp. 97-125]. Para sus efectos ciudadanos, es esencial Costa, 2000.

consciente y responsable de que su acción determinaba el destino de la sociedad y también del Estado, el que salía de su círculo íntimo y manifestaba sin miedo y sin rubor su ideología, el que intentaba que esta se materializase de una forma ordenada y pacífica, y guiase así el modo en que se gestionarían los asuntos públicos —con su correspondiente relevancia en el ámbito privado—. Fue alrededor del año 1848 cuando Europa asistió asustada a tales reivindicaciones en varios frentes. Nuestro país fue una excepción en ese mar revolucionario en que se había convertido todo el continente. Si 1848 pasó en España sin pena ni gloria, merced a los poderes excepcionales que Narváez se había otorgado, 1868 fue el intento más parecido a esa sucesión de revoluciones europeas, con retraso, pero con idéntica intensidad y análogos fundamentos. Si 1848 intentó hacer avanzar al liberalismo y poner en primera línea de la reflexión los derechos políticos con algunas incrustaciones sociales, 1868 implicó para España una conmoción de gran intensidad respecto al modelo constitucional que se había desarrollado hasta entonces, y una apuesta clara y decidida por esos nuevos derechos y por una reflexión también novedosa sobre los mismos y sobre su fundamentación. Eran, como dijo la Comisión Constitucional del año siguiente, aquellas condiciones indeclinables que moldeaban el carácter del ciudadano⁴. Casi nada y casi todo.

2. SEGUNDO ACTO: DOCTRINARISMO

Recapitulando y *grosso modo*, se puede decir que el constitucionalismo moderado se había articulado a partir de una serie de premisas fundamentales que bebían del modelo liberal de la Restauración gala, aquel doctrinarismo francés⁵, luego español⁶, que se nutría de la Historia como fuente final de toda legitimidad política, así como de un acentuado pragmatismo y un rechazo de cualquier suerte de abstracción. Nada de racionalismo o de pureza especulativa. Ese historicismo, que no impedía para nada la presencia de elementos nacionales, tenía importantes consecuencias en el orden constitucional. La Historia era el elemento fundante del poder y de la estructura que lo acompañaba. En consecuencia, la decisiva noción del poder constituyente, expresión de la capacidad máxima del sujeto político para decidir el orden que se quería libremente, se desdibujaba, se debilitaba y finalmente desaparecía como por ensalmo. En la Historia encontramos ya

⁴ *Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes (en adelante DSCC)* Apéndice al núm. 37, 30/3/1869, pp. 1-2.

⁵ Starzinger, 1991; Craiutu, 2003 y 2006; y Rosanvallon, 2015.

⁶ Díez del Corral, 1945; Abellán, 1984, pp. 318-393; Elorza, 1988, pp. 127-211; especialmente, pp. 163-174; Antón y Caminal, 1992; Colomer Viadel, 1993; López Alonso, 2002; Gómez Ochoa, 2002; Menéndez Alzamora y Robles Egea, 2013, pp. 61-98; y Sánchez García, 2016. Para algunos de sus principales ideólogos, bajo la forma de *Lecciones de Derecho Político*: Alcalá Galiano, 1984; Donoso Cortés, 1984; y Pacheco, 1984, acerca de los cuales han reflexionado Garrorena Morales, 1974; y Varela Suanes-Carpegna, 2007, pp. 325-352.

dadas y definidas todas las instituciones que personificaban a una Nación políticamente hablando⁷. A la Historia había que volver y sobre su guion trabajar para efectuar cambios y enmiendas siempre pensando en la mejora de las condiciones políticas, pero sin obviar aquello de lo que se partía. Esta labor suponía desconfianza hacia el contenido de ese poder fundacional, pero también un recelo absoluto hacia el sujeto que estaba dispuesto a encarnarlo y llevarlo a la práctica. La negación del poder constituyente venía dada, en suma, por un temor total a la Nación como cuerpo de ciudadanos políticamente activos y a la expresión de su voluntad por medio de la soberanía, algo que podía tener como resultado una desviación del curso lógico (por histórico) de los acontecimientos. La Historia ofrecía un modelo aquilatado, consolidado, perfectamente constatable en cuanto a su eficacia, susceptible de correcciones, pero partiendo siempre de que algunas de sus ideas adquirirían un tono de dogmas de fe. Eran infalibles, por tanto. No se podía cambiar todo, sino que partes del diseño político tenían que ser irremediablemente aceptadas sin discusión posible, sin cuestionamiento. Cercenada esta posibilidad de renovación absoluta en el momento fundacional, la inmediata consecuencia, pensando en la Francia post-napoleónica y en el modelo británico de Monarquía constitucional, era la soberanía compartida, la soberanía que se repartían la Corona, de un lado, y, de otro, unas Cortes bicamerales donde tenían encaje tanto las aristocracias en todas sus versiones o capacidades (el Senado) como la nueva burguesía emergente (el Congreso de los Diputados). Se sumaban las dos legitimidades históricamente presentes. Con esto se lograba la estabilidad política, paso posterior a la consecución de una primera estabilidad social que traía consigo la calma y la tranquilidad totales. Solidificado el modelo social, apuntalado éste, la vida política tenía un espejo en el que mirarse. Buscando en la Historia, por tanto, el recurso inexcusable hacia el que había que dirigir la mirada, ¿qué era lo que se encontraba como definidor de la realidad política española?

Como mínimo, tres cosas aparecían. Si echamos la vista atrás y nos colocamos en el primer momento en que aparece, siempre según la cosmovisión de nuestros moderados, la Nación española, España como realidad primigenia, esto es, en tiempos visigodos, hay tres elementos que comparecen para definir esta forma política de lo que había sido, es y será España: Monarquía, Religión y Cortes. Dicho de otro modo: España había sido siempre monárquica, católica y partidaria de la representación nacional para controlar a los reyes y evitar sus derivas tiránicas o despóticas —más bien las de sus ministros—. Ahí está la Constitución histórica o interna, como le gustaba decir a Cánovas. Tres elementos indiscuti-

⁷ Álvarez Junco, 2001; y Andreu Miralles, 2016.

bles, innegociables, que debían estar presentes en toda Constitución, que la antecedian y que, por supuesto, eran superiores a lo que allí se escribiera. Estaban por encima de la escritura y la dirigían, al mismo tiempo, de modo inflexible. Dictaban contenidos innegociables. Si esto era lo históricamente fundado, lo tradicional, no cabía realizar innovaciones de ningún género, sino aceptar este legado y profundizar en su materialización durante todo el tiempo que fuese posible, perpetuarlo y fortalecerlo mediante las defensas puntuales del mismo, tal y como las Cortes de Cádiz lo habían hecho en 1812: se trataba de visitar las antiguas Leyes Fundamentales y asegurar su cumplimiento con providencias y precauciones —ahora sí, todas ellas— novedosas⁸.

El concepto de Constitución quedaba asimismo debilitado por lo hasta ahora afirmado. Los moderados manejaban una idea instrumental muy clara y perfilada. La Constitución era un instrumento de Gobierno. No era algo que se diera la sociedad, sino que se daba a la sociedad y para la ordenación de la misma, algo que mandaba y ordenaba. No interesaban su esencia, ni su sujeto creador, algo irrelevante a los efectos moderados, ya la Nación, ya el Pueblo. Lo importante es que la Constitución impere, mande, ordene, dirija, constriña. La Constitución ya está hecha. Está presente y actúa. Lo que precede a su emergencia no se tiene en cuenta. Está aquí para quedarse por estable y para dirigir. Ese es su fin principal. Asimismo, como ya se ha advertido, la Constitución no era fruto de poder constituyente alguno, sino de una serie de elementos decantados por la Historia y perfectamente definidos. Era una ley, pero sin más. Ni superior, ni única, ni exclusiva. Un texto escrito en donde tan importante era lo que en él se introducía —la escritura propiamente dicha— como lo que no se escribía —había materias constitucionales al margen de la Constitución. Por ejemplo, el componente católico—. Debido a tales motivos, ni se contemplaban formas especiales de reforma —esta se producía por el mero acuerdo entre los principales sujetos constituidos: Corona y Cortes, Rey y Nación—, ni se postulaba una superioridad formal o material de aquella, ni, por supuesto, se hablaba de su defensa. La Constitución era una ley más, así nombrada, sin mayores especialidades formales, cambiante, ordinaria, común. En ella se recogía lo que se tenía que recoger no porque lo dijese una supuesta voluntad nacional, sino porque lo imponía una tradición histórica a la que no se podía renunciar bajo pena de romper el orden, la armonía, la paz, la tranquilidad. De quebrar una tradición en donde estaban radicadas la estabilidad y la perduración⁹.

⁸ Para esas cuestiones gaditanas: Garriga, 2010; Lorente y Portillo, 2011; y Martínez Martínez, 2013.

⁹ Para los perfiles de ese orden jurídico del siglo XIX: Lorente Sariñena, 2001; Varela Suanzes-Carpegna, 2007, pp. 417-447 [luego ampliado en 2010]; y Solla Sastre, 2009.

La Constitución moderada se pensaba en clave de poderes y no de ciudadanos, dado que se entendía que el peso específico para lograr esa aspiración de orden y de armonía derivaba de la necesaria colaboración entre las instituciones para proteger el mínimo jurídico que correspondía a los ciudadanos, destinatarios últimos de ese equilibrio, mas no protagonistas principales. Ese mínimo no se defendía de modo natural o con invocaciones a la razón. Solo los poderes permitían la eclosión del ciudadano y no al revés. Pero la supuesta división de poderes, que operaba como garantía individual, no dejaba de ser una ficción, cuando no una pantomima. Bajo esa idea de soberanía compartida, se otorgaban amplios poderes de dirección a la Corona —la *prerrogativa*, la sanción y el veto—, de suerte tal que el monarca asumía un rol protagónico en muchos escenarios. Podía legislar, porque sin su firma no había leyes, por más que las aprobasen las dos Cámaras. Tenía a su cargo el Poder Ejecutivo, el Gobierno, que poco a poco se va independizando y adquiriendo unos perfiles propios y definidos, aunque sin olvidar sus orígenes monárquicos y su lealtad a la realeza¹⁰. A la sombra de la Monarquía, el presidente del Consejo de Ministros pasará a ser la figura capital para dominar a la Corona y hacer que triunfen sus propósitos partidistas por encima de cualesquiera otros. Una sólida Administración, construida poco a poco, aparecía como el brazo ejecutor de ese Gobierno, con ramificaciones en todo el país por medio de Gobernadores, Diputaciones, Alcaldes y Ayuntamientos, amén de otras figuras —Consejos Provinciales, Intendentes, Delegados de Hacienda, funcionarios de todo tipo—, un cuerpo relevante y trascendente por todo lo que podía hacer y por todo lo que no se le podía hacer —prácticamente inmune y, por ello, irresponsable hasta finales de la centuria—, con su Derecho propio y también con sus propios tribunales¹¹. Por fin, la Justicia se concebía como Administración, esto es, como algo que se administraba o gestionaba en nombre del rey, alejado de cualquier suerte de legalidad, por jueces y magistrados que aquel nombraba de forma discrecional, con un personal sobre el que no cabían afirmaciones de independencia, ni de inamovilidad, dada esa conexión umbilical con la Corona y sus aledaños¹².

Si sumamos a esto la persistencia de los antiguos fueros, nos damos de bruces con una realidad constitucional pensada en exclusiva para los poderes, para las instituciones, para mandar, donde el ciudadano tenía reservado un espacio muy reducido, como ahora se podrá examinar. Predominaba el propósito de deber, de sujeción, de sometimiento. Si la idea de Constitución exigía garantías

¹⁰ Marcuello Benedicto, 1986, 1988 y 1995.

¹¹ Pro, 2019.

¹² Lorente Sariñena, Martínez Pérez y Solla Sastre, 2012, pp. 115-272.

de los derechos y poderes separados, tal y como se había afirmado en el verano francés de 1789, el pensamiento moderado concentraba esfuerzos en el segundo rubro, de forma *sui generis*, mientras que postergaba el primero hasta el punto de olvidarlo y hacerlo casi evaporarse del debate público. La garantía de los derechos eran los poderes; es más: precisamente los poderes estaban contruidos para imponerse sobre los derechos y las libertades, erigirse sobre sus restos y ruinas, aniquilarlos en provecho de la idea de orden. Esta suerte de «sedación constitucional», por cuanto que se propugnaba un constitucionalismo ajustado, al límite, de mínimos, de poderes y no de individuos, de instituciones y no de ciudadanos, es el mayor logro de los moderados, de lo que solamente se despierta en el Bienio Progresista y, más adelante, en 1868. La lectura del modelo constitucional se efectuaba, pues, en esa doble dirección de mínimas garantías, con postergación ciudadana y tibia separación de poderes, que se conducía más bien hacia una colaboración entre todos ellos, guiados por la Corona, de donde derivaba, a partir de esa unión, la protección conjunta del modelo político. Esta afirmación conducía irremisiblemente a la preponderancia de lo orgánico frente a lo dogmático, a la ocultación del individuo y a la maximización de los poderes contruidos.

Si las Constituciones precisaban de los poderes separados para existir, realmente lo que hallamos en el modelo moderado es un poder único, la Corona, del que nacen otros —el Gobierno o Ejecutivo, o el Judicial— y frente al que están las Cortes, llamadas no a oponerse a aquella, sino a colaborar lealmente con la misma, a participar en la suma de legitimidades para mayor gloria de la Monarquía y de la Nación. Ese predominio se observa con claridad en la clara superioridad que se tenía sobre el Parlamento, que se abría, se cerraba, se suspendía y se disolvía a golpe de Real Decreto, que apenas legislaba —en tanto en cuanto el Ejecutivo y la Corona habían conseguido, por medio de las más diversas técnicas, reducir esa función al mínimo indispensable y concentrarla, por ende, en sus manos—, y que tampoco desempeñaba ninguna labor de auténtico control político. El Parlamento era, en este diseño, un órgano consultivo, asesor, de consejo, parecido a lo que había en tiempos medievales y modernos, cuya actuación más relevante, la legislativa, no podía concebirse sin la actuación de los reyes a través de la sanción. El dominio de la Corona era evidente. Y, junto con ella, el dominio del Ejecutivo que prácticamente campaba a sus anchas empleando los poderes moderadores que se habían atribuido a la Monarquía¹³. Finalmente, las elecciones, con un cuerpo electoral muy reducido, no dejaban de ser una ficción antes que una manifestación de la voluntad de la Nación. Lo que se pretendía es que esta

¹³ Marcuello Benedicto, 1989, 1993 y 1998.

situación institucional, nada estricta y sí muy flexible por adaptable y maleable, pudiese sobrevivir años y años al servicio de las elites políticas. Lo había expresado con exactitud y suma claridad el Gobierno de Martínez de la Rosa cuando se presenta el *Estatuto Real* a la Reina Gobernadora allá por el año 1834: no se trataba de desenterrar las instituciones tal y como pudieron convenir a nuestros antepasados allá en siglos remotos y en circunstancias diferentes, sino de aplicar con discernimiento y cordura los principios fundamentales de la antigua legislación al estado actual de la sociedad, cuyo bienestar es el fin y objeto de todas las instituciones humanas. No se buscaba, pues, hacer arqueología política, sino captar la esencia de las instituciones y trasladarla a los tiempos actuales para provecho de la sociedad¹⁴. Eso mismo es lo que había movido al legislador, bajo estricto mandato de Narváez, a modificar la Constitución ecléctica y transaccional de 1837¹⁵, dando como resultado el texto de 1845¹⁶, en cuyo preámbulo leemos que la voluntad de la reina y de las Cortes del Reino, los dos sujetos soberanos, había sido la de regularizar y poner en consonancia con las necesidades actuales del Estado los antiguos fueros y libertades de estos reinos y la intervención que las citadas Cortes habrían de tener en los negocios graves de la Monarquía¹⁷. Se trataba, pues, de avanzar, pero no de hacerlo a cualquier precio y bajo cualquier condición. Había que hacerlo con seguridad, con calma, con criterio, sopesando todo lo que se quería hacer, lo que se quería abandonar y lo que se quería implementar. Avanzar con paso firme y con respeto a lo anterior. El pasado, la tradición, la Historia era algo que no podía tocarse, ni de lo que se podía prescindir. Un patrimonio inmaterial vinculante. Si acaso podía ser sometido a un proceso de adaptación, preservando esencias y aceptando lo que los nuevos tiempos y las necesidades estatales demandaban. Pero sin alterar los muros de carga principales, los muros más sólidos sobre los que se sustentaba la vida política y que eran, en resumen, los tres ya indicados —Religión, Corona, Cortes—. Ahí estaba radicado el sostén principal del edificio constitucional moderado.

Pero, ¿y los ciudadanos? ¿Dónde quedaban ubicados? ¿Cómo les afectaba esa tríada presuponiendo que todos ellos serían católicos, monárquicos e integrantes de la Nación por medio de su labor políticamente activa? ¿Cómo se con-

¹⁴ Rico Linage, 2010 pp. 71-79. Exposición del Consejo de Ministros a S. M. la Reina Gobernadora de 4 de abril de 1834 (*Gaceta de Madrid* de 17 de abril). Para el *Estatuto Real*: Tomás Villarroja, 1968; y Monerri Molina, 2019.

¹⁵ Varela Suanes-Carpegna, 1983-1984 [también en 2007, pp. 311-324]; Fernández Segado, 1983-1984 y 1987; Tomás Villarroja, 1985; Colomer Viadel, 1989; y Pro, 2010.

¹⁶ Cánovas Sánchez, 1985; Marcuello Benedicto, 2007; y Rueda Hernanz, 2015.

¹⁷ *Constituciones españolas: 1808-1978*, 2016, pp. 98-108. Constitución de 1845; y pp. 122-139. Constitución de 1869, a la que aludiré más adelante.

figuraba su estatuto subjetivo? ¿Bajo qué presupuestos? Esa presunción de pertenencia triple desposeía a esos supuestos ciudadanos de cualquier reflejo político en cuanto a su diseño jurídico individual. Lo relevante eran aquellas dos condiciones que determinaban formar parte de esa sociedad burguesa, de esa Monarquía, las dos condiciones primigenias de las que se derivaban todas las demás —amén de la moralidad católica, que se daba por supuesta y que condicionaba ulteriores lecturas del estatuto particular de cada uno—: me refiero, claro está, a la libertad personal y a la propiedad privada. El dualismo burgués de siempre. Lo civil y lo social cobraban todo el protagonismo. Lo demás era secundario, amén de vicario o subordinado a los dos elementos anteriores. El papel del ciudadano como sujeto político relevante era bastante reducido, por no decir mínimo, incluso inexistente. Marginal y postergado. No obstante lo cual, las Constituciones moderadas comenzaban hablando de los españoles, distinguiendo entre los que lo eran originariamente y los extranjeros que habían obtenido carta de naturaleza o ganado vecindad —dando a entender la existencia de una diferencia entre los mismos a desarrollar legalmente—, para después enumerar unos pocos derechos y libertades. Lo relevante parecía ser, pues, el diseño institucional, el Gobierno, y los ciudadanos, su felicidad y su bienestar, vendrían dados por añadidura, con ese Gobierno que respetase sus esferas de privacidad personal y patrimonial, y que protegiera el modelo social en su conjunto. La vida política armoniosa era la base para que la vida ciudadana también lo fuese. Al Estado correspondía la protección de la sociedad en donde jugarían de forma irrestricta aquellos hombres libres y propietarios que estaban en la base del modelo social.

El texto de 1845 nos puede servir de referencia en sus artículos del 2 al 11. Se reconocían sucesivamente la libertad de imprenta y de publicación de ideas sin previa censura, pero con sujeción a las leyes —sin alusiones, como en 1837, al jurado para los delitos de imprenta—, el derecho de petición a las Cortes o al rey como determinen las leyes, la unidad de los Códigos —pero no de los fueros jurisdiccionales—, la igualdad para acceder a empleos y cargos públicos, según mérito y capacidad —en el orden público, pero no en el privado, donde subsistirían desigualdades de gran calado y largo recorrido—, los deberes militares y fiscales —defender a la patria con las armas y contribuir en proporción a sus haberes para los gastos del Estado—, y, por fin, las afirmaciones de los dos derechos a los que se podía reducir el estatuto jurídico de todos y cada uno de los españoles: la libertad individual, concebida como seguridad, no como autonomía, como inmunidad física, y la propiedad privada, desarrollo y consecuencia de lo anterior. No se afirmaban en positivo, sino desde la perspectiva de su protección frente a eventuales ataques, frente a su posible vulneración: nadie podrá ser detenido o separado de su domicilio, ni allanada su casa, sino en los casos y en la forma que prescriban las leyes, del mismo modo que ningún español podrá ser

procesado o sentenciado sino por el juez o tribunal competente, por leyes anteriores al delito y conforme a las formalidades que estas prescriban. La propiedad privada, el sacrosanto derecho en el que se basaba la sociedad misma y, con ella, el Estado, no podía ser objeto de destrucción o de desconocimiento: no se aplicará nunca la pena de confiscación de bienes y nadie podrá ser privado de su propiedad, salvo causa justificada de utilidad común, previa la correspondiente indemnización —la expropiación se introducía en este instante como exigencia de una Administración que se quería activa y dinámica—. Culminaba el apartado de los derechos con una matizada proclamación de la confesionalidad: la religión de la Nación española (no la de los españoles, por ende) es la católica, apostólica y romana, por lo que el Estado se obligaba a mantener el culto y sus ministros. Nada más en esa sede. Muy poca cosa, en resumidas cuentas¹⁸.

Esa parca y tibia regulación de derechos exige poner de relieve varios elementos. Es muy limitada desde el punto de vista cuantitativo. Son pocos los derechos aquí reconocidos. Además, son dos los fundamentales ya indicados, los preponderantes, libertad y propiedad, en línea con un primer liberalismo que a mediados de la centuria estaba ya rebasado por la izquierda y por la derecha en el resto del continente. Las referencias a los derechos políticos se circunscribían solamente a esa libertad de imprenta, al poco eficaz derecho de petición, a la igualdad en lo público y a la unidad legislativa, quebrada por la inexistencia de una idéntica proclamación de la igualdad jurisdiccional, amén de la confesionalidad indicada, con manifestación aparente de tolerancia —cosa que corresponderá refutar al Concordato de 1851—¹⁹. Ninguno más. Ni una sola referencia al sufragio o a los relevantes derechos políticos que Europa comenzaba a consolidar, tales como la asociación, la reunión o la libertad de conciencia. Esto se situaba fuera de la Constitución y en los términos que el Moderantismo quería, es decir, en términos de desigualdad consustancial a las propias relaciones sociales. Esos tales derechos políticos se reconocían, en caso de hacerlo, de un modo diferenciado, subordinado o vicario, y sobre bases patrimoniales: aparecían más bien como concesiones graciosas del Estado, como auténticos privilegios de clase, antes que como derechos perfectamente definidos y engarzados en la vida política y social. Sí se comprometían con la sociedad y se daba entrada a los ciudadanos libres y propietarios, que no eran todos, en ese marco social. Pero ese mismo acceso estaba vedado en los territorios típicamente estatales con restricciones aún mayores. Ahí no había inserción posible, ni visos de conseguirla: las decisiones públicas quedaban proscritas para el común de los ciudadanos, no tenían capacidad

¹⁸ Martínez Yáñez, 2002.

¹⁹ El Concordato y su Convenio adicional del año 1859, en Ibán y González, 2001, pp. 96-118. Un comentario al mismo, García Pérez, 2014. Para una reflexión más general, Alonso, 2014.

de ninguna forma para condicionar la voluntad del Estado. Lo que interesaba era el ciudadano católico, padre de familia, propietario, cauto, ordenado, comedido, y respetuoso con ese orden, un ciudadano cuya voz no era preciso oír y que tampoco este reclamaba de forma especial. Primaban solamente las formas tradicionales de estructuración o agrupación social. Nada artificial se tomaba en consideración. Solo las bases naturales de impronta católica. Había una apuesta clara por la sociedad, a la que pertenecían esos individuos propietarios y a la que podían pertenecer potencialmente todos los ciudadanos. Esa misma apuesta se volvía contra ellos en su relación con el Estado, al que no se permitía acceder más que de modo fragmentario y limitado. Era algo inexpugnable e intocable. Los derechos políticos constituían la prolongación de los derechos civiles. Los titulares de estos últimos eran los mismos titulares de los primeros. Es decir, un elenco muy reducido de la población. Eso era lo que integraba la Nación moderada en su conjunto.

Pero por encima de estas cuestiones de cantidad —de derechos y de titulares de los mismos—, hay que poner de relieve la cuestión de la calidad. Los derechos y las libertades se enumeraban sin ninguna mención a su origen, de modo tal que el Derecho Natural no hacía más que convertirse en rémora y en recuerdo. El fundamento de estos derechos no estaba en una supuesta Ley Natural o en la cosmovisión católica, sino en un estatismo positivista impregnado de religión o matizado por la misma muy vagamente. El pragmatismo triunfaba sobre el factor teológico. La necesidad de orden vencía incluso a ese marchamo católico inmarcesible. Esa querencia estatal se dejaba sentir en un hecho clave: la existencia, el perfil, los límites y los modos de ejercicio de los derechos y libertades constitucionales venían determinados todos ellos por la ley, no por otro instrumento. No eran derechos y libertades directamente citables, invocables y aplicables. No eran naturales, ni mucho menos. Su existencia dependía de la ley. Su realización dependía de la ley. Su vigencia dependía, una vez más, de la ley. Sin la ley no eran nada. No comparecían, ni podían imponerse. No podían llegar a nacer y a hacer acto de presencia. No se podía invocar el iusnaturalismo etéreo, sino solamente la contundencia física de la ley estatal. Allí estaba toda la fortuna de cada uno de esos derechos y de cada una de esas libertades. Se fiaba todo a la decisión estatal. Sabemos, por lo ya indicado, que la ley no era necesariamente un producto de las Cortes. Podía serlo, pero no era lo regular: el Ejecutivo había conseguido por medio de varios mecanismos hacerse con el Poder Legislativo, poder que culminaba con la sanción regia. Por tanto, si no se hacía una ley específica, el derecho particular no afloraba, no se podía invocar, no se hacía presente, tangible, real, no se materializaba. Ese territorio ciudadano no podía recorrerse, salvo por medio del instrumento legal. Faltando este, el Ejecutivo y su Administración serían los que se hiciesen dominadores de la situación y ocupasen esos

espacios que no podían quedar desprotegidos y desamparados de un mínimo apoyo público. Menos ley suponía más Gobierno. Y, por descontado, menos ciudadanía²⁰.

Por si todo esto fuera poco, algunas de las garantías pensadas para la tutela de la libertad y de la propiedad —las detenciones, la prisión o el desplazamiento de domicilio— podían ser suspendidas, conforme al artículo 8 de la Constitución de 1845, cuando la seguridad del Estado así lo exigiese en circunstancias extraordinarias, en toda o en parte de la Monarquía, sin fijar criterios limitativos en cuanto a duración o en cuanto a saber en qué consistía dicha excepcionalidad. Una ley —¿qué dispositivo sino este!— regularía esos casos, lo que suponía poner en manos del Ejecutivo, una vez más, un poderoso instrumento para controlar ese disminuido tejido de derechos y de libertades. El Estado creaba los derechos; el Estado determinaba su vigencia y su aplicación, el Estado podía demorar su nacimiento y suspender su concreta aplicación, provisionalmente o de modo definitivo, acogiéndose a unas circunstancias lo suficientemente flexibles y amplias como para poder prolongar en el tiempo y en su provecho esa situación de excepcionalidad que devenía así común y cotidiana. Los derechos solamente tenían sentido desde el Estado y a partir del mismo. Sin el Estado, no había ciudadanos. La ciudadanía quedaba reducida a una cuestión del poder, a una concesión pública. No eran los derechos los que fijaban límites al poder, sino, a la inversa, era el poder el que decía los contenidos mínimos de los derechos, su existencia misma. Era el poder el que creaba al ciudadano²¹.

3. TERCER ACTO: REVOLUCIÓN Y CONSTITUCIÓN

Todo esto cambia radicalmente cuando nos enfrentamos a una lectura de la Constitución de 1869²², porque el diseño constitucional empieza a conformarse desde una óptica absolutamente diferente a la de los tiempos moderados.

²⁰ La derivación o culminación de este ideario, llevado a su máxima expresión, sería la posición autoritaria conservadora, ejemplificada por Bravo Murillo y su proyectada reforma constitucional en el año 1852: Martínez Martínez, 2019.

²¹ Romero Moreno, 1983; Tomás y Valiente, 1989; Roldán Álvarez, 1990; Astarloa Villena, 1996; Maestro Buelga, 1996; Cruz Villalón, 1999; Fernández Sarasola, 2004 y 2012; Varela Suanzes-Carpegna, 2007, pp. 109-119; Pérez Ledesma, 2007; y Bilbao Ubillos, 2015.

²² Para visiones generales sobre el constitucionalismo español, con especial referencia a este texto: García Fernández y Espín Templado, 1976, pp. 13-39 y pp. 60-61; Alejandro García, 1978, pp. 179-182; Sánchez Agesta, 1984, pp. 255-292; Clavero, 1984, pp. 75-84, y 1989, pp. 97-117; Fernández Segado, 1986, pp. 265-328; Solé Tura y Aja, 1990, pp. 55-62; Núñez Rivero y Martínez Segarra, 1997, pp. 149-163; Torres del Moral, 2009, pp. 119-134; Tomás Villarroja, 2012, pp. 83-95; y Varela Suanzes-Carpegna, 2020, pp. 267-325. Para estudios particulares sobre el texto de 1869: Carro Martínez, 1959; Donézar Díez de Ulzurrun, 1985; Peña González, 2002a y 2002b; y el más completo de Pérez Ledesma, 2010. También son originales las lecturas de Vallejo Fernández de la Reguera, 1993-1994, 1997 y 1998. Para sus influencias más concretas, Oltra, 1972;

Se ha mutado la partitura liberal y se profundiza en las esencias más radicales de esa corriente de pensamiento merced a la combinación y aceptación de un nuevo (a la vez, antiguo) credo político llevado a su máxima expresión²³. La nueva Constitución cambia las instituciones —la fórmula a ensayar es ya una Monarquía parlamentaria, más que simplemente constitucional, con efectiva soberanía nacional y división de poderes—²⁴, pero ese cambio se hace en función de una reafirmación del ciudadano y de sus derechos, no por el propio poder en sí mismo considerado, en su exclusivo provecho. Se cambia la estructura para una sublimación de la ciudadanía, para hacerla crecer y hacerla fuerte, segura, sólida, estable. El orden da paso a la libertad, aunque el resultado final fuese el caos. Una sana afirmación del individuo ciudadano preside el nuevo diseño. El poder se aparta para que emerja ese hombre nuevo propietario y libre, seguro y feliz, pero también implicado en el desarrollo de los asuntos públicos, en la gestión de ese Estado que no puede ignorar los requerimientos de la sociedad: un nuevo hombre que habla, se expresa, se asocia, se reúne, vota, pide, demanda. Un *homo politicus*. Que vive una nueva y real vida política, comprometida y efectiva, tangible y posible, y que no está constreñido por el poder, sino que lo concibe, al contrario, como una sucesión de instancias a su servicio²⁵. La Constitución apuesta por esa remozada vida pública, por el foro, el debate, el combate dialéctico, por la vida abierta, por una participación directa, por una Nación que habla con todas sus voces y potencialidades, sin intermediarios. Y lo hace porque se ha asegurado su inmunidad particular de una forma mucho más precisa y perfecta que la que comparecía en tiempos anteriores, como se verá. Pareciera como si se recuperase un cierto pulso iusnaturalista, que algunas voces califican mejor como iushumanista²⁶, puesto que se coloca en primer lugar al hombre en todas sus dimensiones, sin vincularlo a credo alguno o a moralidad dominante y excluyente. Hay, si se quiere ver así, en mi modesta opinión, aspectos solapados del krausismo, de su espiritualidad y de su optimismo antropológico frente a los siglos de oscuridad y de

y Pérez Ayala, 2002, que miran a los Estados Unidos y a Bélgica, respectivamente.

²³ Sobre los partidos políticos triunfantes en 1868: Eiras Roel, 1961; Martínez Gallego, 2001; y Vilches, 2001. Más datos sobre figuras particulares: Ollero Vallés, 1999 y 2006; Sagasta, 2000; Burdiel y Pérez Ledesma, 2000; Moreno Luzón, 2006; Pérez Ledesma y Burdiel, 2008; e Higuera Castañeda, 2016. Incluso la presencia republicana cobra cuerpo: Miguel González, 2007; y Peyrou, 2008. El marco general en Artola Gallego, 1991, pp. 279-321; y en Suárez Cortina, 2006. Para su calibre y potencia electorales, los datos suministrados por Martínez Cuadrado, 1969.

²⁴ Calero, 1987, pp. IX-XLVIII; Bolaños Mejías, 1998; González Rodríguez, 2002; Varela Suanzes-Carpegna, 2007, pp. 497-516.

²⁵ *Ciudadanos*, 2008; y La Parra López, Pérez Ledesma, Luis et al., 2012.

²⁶ Clavero, 2016, pp. 59-76. También interesa Varela Suanzes-Carpegna, 2002 [asimismo en 2007, pp. 479-494], para este, es un liberalismo que califica de democrático, dotado de un sentido moral y moralizador que hasta entonces no se había dado en estas tierras, salvo durante el período gaditano.

cadenas en que han vivido los españoles en los momentos inmediatamente anteriores. El hombre civil y el hombre político aparecen en abierta competición con el poder que ahora sí se ve limitado. Ciertamente que siguen pesando condicionantes añejos que, en cierta forma, dificultan, pero no imposibilitan, el nuevo escenario de las libertades. Lo condicionan y lo delimitan; no lo anulan. Ningún derecho, tal y como se dirá en el escenario constituyente, puede ser absoluto e ilimitado porque ha de armonizarse con los derechos de los demás. Debe ser leído en su contexto y en su medida constitucional y legal. Así se hablará de la religión, de la moral, de las costumbres, de la autoridad o de la higiene, como parámetros para la adecuación de ciertas conductas y ejercicios al marco constitucional general. La libertad no puede ser nunca ilimitada, ni imprecisa, y juegan condicionantes legales y extralegales de lo más variado, acaso para mostrar la riqueza y la altura de miras de los nuevos valores constitucionales dominantes, unos valores que no son religiosos, sino que aparecen alejados de ancianos y estrechos dogmatismos. Son ilegislables, se dirá, tales derechos, pero no porque la ley no los puede regular, sino porque esa misma ley no los puede anular: su base última es la Constitución y, antes, el estatuto de cualquier hombre —de nuevo, el Derecho Natural—, lo que implica que están colocados en un lugar de preeminencia del que no pueden ser desbancados. Son generales, universales, de todos, sin patria concreta²⁷.

²⁷ Algo en lo que coinciden varias figuras políticas, con ocasión del debate alrededor de los artículos 16 y 17 de la Constitución, en los que se procedía a reconocer variados derechos políticos ya citados —sufragio, imprenta y expresión, reunión, asociación, petición—. Para Romero Robledo, tales derechos naturales, entre los que no incluye al sufragio, son principios eternos, fundados en la naturaleza del hombre, que han sido reconocidos en todas las épocas y en todos los países por asentimiento espontáneo y unánime: piedra angular del edificio político —continúa— serán los derechos individuales, sagrados, eternos, imprescriptibles, ilegislables, que evocan una cierta idea de Justicia por encima de mayorías políticas, al que sigue una réplica de Romero Girón, de corte progresista y amplitud en el reconocimiento de tal derecho. El moderado C. Álvarez interpreta el adjetivo «ilegislabile» atribuido a estos derechos del modo que sigue: ningún derecho es absoluto, sino que se debe someter a ciertos límites asimismo naturales, como el ejemplo de la libertad de imprenta sobre el cual él argumenta. Desde la órbita demócrata, J. M. Orense, por su parte, expone el caso norteamericano, de derechos ilegislables explicitados en la Constitución, la cual opera como parámetro de validez de todos los actos de cualquier poder, incluido el legislativo, insinuando la posibilidad de transferir a España ese modelo. Son derechos constitucionalmente garantizados y respecto de los cuales la ley opera como desarrollo de la Constitución, limitada por ella. Por fin, C. Martos explica que son derechos anteriores y superiores a la organización de los poderes públicos, que residen esencialmente en el individuo y se derivan directamente de su propia naturaleza moral: son ilegislables porque no nacen de la ley y, en consecuencia, tampoco la ley puede privar de ellos al individuo. Nacen con la constitución orgánica del individuo, viven con él y mueren con él, y ninguna ley, salvo la que sea tiránica, atentatoria e inicua, puede arrancarlos. En resumidas cuentas, para unos, la ley es indispensable en orden a articular estos derechos sin límites de ninguna clase, salvo los que imponen los restantes derechos que han de tener su correspondiente reflejo legal; para otros, los situados en las proximidades del Partido Demócrata y en la órbita republicana, la ley no puede afectar al círculo interior mínimo de esos derechos: la ley no puede eliminar el derecho. En el primer caso, la ley se impone al derecho subjetivo, porque condiciona totalmente su ejercicio, algo que suponía la vuelta al patrón moderado, en cierta medida. En el segundo, de la mano de la Constitución, el derecho triunfa sobre la ley de una forma abrumadora.

Pero en la concepción del Título I, que habla de los españoles y de sus derechos, donde aparecen esas facultades naturales, absolutas, perpetuas e ilegislables²⁸, se inserta un regusto ciertamente iusnaturalista de corte laico o racional, fruto de los tiempos avanzados que se viven, donde se incardina la superación de rémoras pasadas, que es consecuencia de las proclamas del Partido Demócrata, el que más hace y más se esfuerza por materializar esta nueva concepción —en particular, la deuda es abundante con José María de Maranges—. Unos derechos que se reconocen, no se crean, y sin que exista una limitación numérica a su proclamación, un número cerrado de los mismos. Muchas de esas ideas habían venido anticipadas por las Juntas y por la labor del Gobierno Provisional, quienes procedieron a reconocer —que no inventar— gran parte de los derechos individuales que después se hallarán recogidos en la Constitución. Había declaraciones, ya no concesiones, ni, por descontado, las viejas habilitaciones legales, tan tramposas, por insuficientes, y tan abundantes, por reiterativas. Ahí está la clave de bóveda del nuevo sistema, según mi modesto entender: esas nuevas instancias de Gobierno se aprestan a reconocer a los españoles toda una retahíla de derechos hurtados por el Moderantismo en los años anteriores. Ignorados, callados, silenciados. Derechos y libertades que debían tener en propiedad, ligados a ellos mismos, que eran suyos sin discusión posible, que ninguna instancia estatal podía cercenar, tal y como las principales Naciones europeas habían articulado en provecho de sus ciudadanos respectivos. Proclaman un elenco de libertades que no nacen por virtud de decretos o leyes, sino que tales normas se limitan a constatar la existencia de unos estatutos jurídicos singulares, naturales, innatos, evidentes, previos a toda acción pública. Los derechos no existen porque se les reconozca, sino que se opera al revés: son reconocidos porque preexisten a cualquier pronunciamiento legal. Se vence la reticencia de los poderes anteriores que no habían decidido cruzar esta línea. Ahora sí se traspasa y se hace de forma drástica, sin concesiones y sin contemplaciones. Son derechos políticos y libertades públicas reconquistados, restaurados, revisitados. La Junta Superior Revolucionaria de Madrid, en fecha de 8 de octubre de 1868, los había establecido de una forma precisa y detallada, y en ello había abundado el famoso «Manifiesto del Gobierno Provisional», de 25 de octubre de 1868: sufragio universal, libertad de cultos, de enseñanza, de reunión y asociación pacíficas, de imprenta sin legislación especial,

y se desliga de ella. Las intervenciones en *DSCC*, núm. 54, 20/4/1869), pp. 1.210 y pp. 1.226-1.229; núm. 55, 21/4/1869, pp. 1.231-1.237; y núm. 56, 22/4/1869, pp. 1.282-1.287, pp. 1.290-1.291 y pp. 1.293-1.296.

²⁸ *DSCC*, núm. 10, 22/2/1869, pp. 83-85. Es el discurso del presidente de las Cortes, Nicolás M. Rivero, quien habla de derechos y libertades en su concepción más extensa y comprensiva, no como concesiones de ningún poder, sino como derechos inherentes a la personalidad humana, sin los cuales no hay dignidad, carácter jurídico, responsabilidad: «Derechos absolutos, ilegislables, porque la ley no los crea, sino los consagra, y que además son por su esencia superiores á todas las instituciones y á todos los poderes».

descentralización administrativa, juicio por jurados en materia criminal, unidad de fuero en todos los ramos de la Administración de Justicia e inamovilidad judicial²⁹.

Y esa declaración se materializa de inmediato en una sucesión de decretos que hacen posible esa recuperación, esa reconquista, esa revivificación de la Revolución encabezada por la Nación española que aspiraba a constituirse de verdad, de una vez para todas, como sujeto soberano y con participación masiva de sus componentes. Ahí están, por ejemplo, el Decreto de 9 de noviembre que extiende el sufragio a todos los varones mayores de 25 años para toda suerte de elecciones; la libertad de expresión y de prensa, asegurada el 23 de octubre; los derechos de manifestación y reunión, de un lado, y el de asociación, de otro (1 y 20 de noviembre, respectivamente), con registro y algunas limitaciones, como la de no pertenecer a otras entidades internacionales, amén de garantías para los derechos más tradicionales ya conocidos, pero revisitados: seguridad individual e inviolabilidad del domicilio por Decreto previo de 15 de octubre, anticipando muchos elementos a desarrollar luego en la Constitución —poniendo el foco en la acción, hasta entonces poco ejemplar, de la Administración y de sus agentes: se incluyen los delitos de detención arbitraria y allanamiento de morada para los oficiales que vulneren tales prescripciones y salvaguardias—. La Justicia, elemento que será decisivo para que la lectura de los derechos y libertades propuesta desde 1868 sea efectiva y completa realmente, pieza clave en el nuevo diseño que debe emanciparse del Poder Ejecutivo, también se verá retocada con el objetivo de incardinar el poder en la misma línea defensiva para con los derechos y libertades citados: entre octubre y noviembre, asistimos a la supresión del Consejo de Estado y de los Consejos Provinciales y de su jurisdicción contencioso-administrativa que pasa a la jurisdicción ordinaria de Audiencias y Tribunal Supremo, a la conformación de una nueva planta para este último Tribunal con las miras puestas en un reforzamiento de la jerarquía, pero también de la unidad, y, sobre todo, a la aparición del trascendental Decreto de 6 de diciembre por el que se hace efectiva, con años de retraso respecto a otros territorios europeos, la unidad de fueros —desaparecen jurisdicciones especiales como la de Hacienda o la mercantil, conservándose, con muchas restricciones, la militar y la eclesiástica—. La vida municipal y provincial también se verá afectada por disposiciones dirigidas a modificar la legislación local moderada, en un intento de hacer efectiva esa autonomía ansiada de la que se dota a estas entidades, parte asimismo de la Nación y de su soberanía, parte asimismo del poder en su diseño conjunto. Finalmente, por Ley de 19 de junio de 1869, se manda se tengan y obedezcan como

²⁹ Bozal Fernández, 1968, p. 99 y pp. 109-119, respectivamente.

leyes todos los decretos del Gobierno Provisional, lo que redondea el asunto antes de la llegada de la Constitución. Pareciera como si las enfermedades políticas hubieran sido claramente diagnosticadas y se les comenzase a aplicar el medicamento sanador. Pero la medida capital se sitúa, sin lugar a dudas, en el entorno ciudadano. Ahí está el cambio más relevante, según mi particular punto de vista.

Los mimbres estaban puestos para realizar una lectura nueva de derechos y libertades sobre la base de ese Humanismo espiritualista silenciado buena parte de la centuria. Los derechos y libertades aparecían como atributos naturales de los hombres y se situaban bajo la órbita de protección del Poder Judicial, de ahí su reforma culminada luego en 1869-1870³⁰, aunque poco a poco ese experimento radicalmente nuevo vaya decantándose por un legalismo más matizado y reducido que el de tiempos anteriores, pero legalismo a fin de cuentas, con sus notas de positivismo y estatismo, peligrosas por cuanto permitían pensar en una vuelta a la situación antecedente³¹. Las nuevas autoridades son conscientes del estado de cosas, de la situación pasada y de la dirección que debían tomar los acontecimientos desde el punto de vista jurídico. El poder constituyente va en serio, erigiendo un nuevo patrón constitucional y reconociendo el punto de partida, que no podía ser otro más que ese nuevo sujeto político plenamente dotado,

³⁰ Lorente Sariñena, Martínez Pérez y Solla Sastre, 2012, pp. 273-453. Para los desarrollos legislativos inmediatos, que modulan bastante el mensaje constitucional: Solla Sastre, 2007.

³¹ Idea puesta de manifiesto por Clavero, 1989, 1990 y 1991, pp. 129-158; y luego desarrollada por Serván, 1998, 2002, con ejemplos de derechos concretos, y 2005, a modo de reflexión general sobre 1869 y sus momentos aplicativos posteriores. Se incide, desde ambas posturas, en dos elementos criticables y que deben someterse a revisión, a mi juicio. De un lado, ningún derecho o libertad puede ser absoluto porque no hay sistema jurídico, por muy liberal que sea o se proclame, que aguante este embate, y debe estar, por ende, a lo que ordene el legislador de conformidad con la habilitación constitucional pertinente. Lo cierto es que la novedad de 1869 es que esos derechos existían y nadie podía verse privado de ellos de forma ilegítima, ilegal o anticonstitucional, sin perjuicio de desarrollos y modulaciones determinados por el Poder Legislativo —preferentemente represivos y nunca preventivos— lo que daba pie para la posterior labor de control y tutela del judicial. De otro lado, la suspensión de algunos derechos y libertades se ejecuta con mayores garantías y salvaguardias que en el constitucionalismo inmediatamente anterior, haciéndolo depender de una legalidad doble. Acaso la ausencia de una proclamación expresa del valor directo e inmediato de la Constitución, de su valor superior, puede ser el mayor reto del texto de 1869, algo que ningún texto europeo avanzaba a sancionar; pero, en ningún caso, esa dependencia del legalismo, única vía para articular los derechos (no crearlos) y única guía para orientar a los poderes en función de aquellos. Lo relevante, por tanto, no es el legalismo, sino los controles establecidos por el diseño constitucional para encauzar la obra legislativa, tanto desde el punto de vista material —los mínimos que la Constitución exige para cada uno de esos derechos y libertades— como desde el institucional —y aquí el Judicial será determinante para cercenar cualquier intento de acción excesiva por parte del Gobierno, en el bien entendido de que se logra, por fin, una correcta separación de los poderes—. En contra de esta postura minoritaria apuntada *supra*, se sitúa, incluido yo mismo, la mayor parte de la doctrina: Maestro Buelga, 1995; Álvarez Alonso, 1999; Souto Paz, 2002; Rovira Flórez de Quiñones, 2002; y Álvarez Cora, 2015. Hay insuficiencias, claro está, por lo que el radicalismo no logra imponerse: Piqueras Arenas, 1992, a propósito de la cuestión esclavista.

plenamente capacitado. Ese nuevo ciudadano, ese nuevo individuo pleno de derechos, tiene después su correlato correspondiente en una pertinente, atinada y cierta proclamación de la soberanía nacional, ahora sí plena, fruto del sufragio universal, la cual redacta la primera Constitución que puede ser calificada como obra de un real poder constituyente por vez primera en la Historia de España: un poder que opta, que afirma, que debate, que huye de dogmas, del pasado y de verdades ya establecidas, que distingue una forma específica de modificación de su texto más allá de los cauces ordinarios, que le reconoce un valor *per se*, político y también jurídico. Por tales motivos, el rey se verá apartado de la función legislativa que corresponde a las Cortes en exclusiva, el Senado tendrá carácter semielectivo, se hablará de sufragio masculino universal, se limitará la *prerrogativa* hasta el punto de eliminar la sanción y el correspondiente veto, se afirmarán las autonomías provincial y local, y, sobre todo, se diseñará un nuevo Poder Judicial, clave de bóveda de la nueva construcción, puesto que será a este poder renovado, independiente e imparcial, a quien se confiera la defensa de los derechos y de las libertades, con recurso a la ley, en efecto, mas ya no con la exclusividad de antaño reconocida a esta. Y todo esto se modifica con un sentido: la afirmación y la tutela de los derechos y libertades con los que se inaugura el texto constitucional. Una cosa conducía a la otra: el nuevo ciudadano requería nuevos poderes a su servicio y para su defensa, lo que implicaba apoderar al Judicial y restringir la acción del Ejecutivo, separando al uno del otro, haciéndolos independientes por imperativo lógico y cívico. El Legislativo, aparentemente, tendría la última palabra por medio de una ley, por él creada, supeditada a ciertos matices constitucionales, pero una ley que se ponía en marcha mediando la labor de los jueces y tribunales. En tiempos moderados, como se ha podido ver, el derecho subjetivo depende de la ley con absoluta exclusividad y consecuencias ciudadanas negativas en caso de no comparecencia del texto legal. Ahora, la dependencia se traslada a la Constitución, a su desarrollo legal cuando proceda por obra del Parlamento, y a su posterior aplicación jurisdiccional, en el bien entendido de que el carácter natural del derecho lo lleva a existir antes y por encima de cualquiera de los textos posteriores que lo reconozca. El derecho aparece, Constitución mediante, sin precisar de ley para su articulación global. Preexiste a la Constitución: esta lo reconoce como tal y es operativo desde ese momento a la espera de las leyes que lo puedan constreñir, definir o acotar con posterioridad, mas nunca nulificar.

Lo relevante no es solo el listado de derechos allí recogidos —mucho más amplio y completo que en cualquiera de nuestros textos constitucionales anteriores, a los que derrota en número y con solvencia—, algo que destacaron los propios diputados constituyentes. Por allí, desfilan la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de la correspondencia, la libertad de residencia, el principio de legalidad penal y procesal, la propiedad privada, el sufragio, los

relevantes derechos recogidos en el artículo 17 —emisión libre de ideas y opiniones, de palabra, por escrito, valiéndose de la imprenta; reunión; asociación; y petición, individual o colectiva, a las Cortes, al rey o a las autoridades—, más la libertad religiosa, la de instrucción o educación, la de industria, profesión y establecimiento, la de movimientos —dentro y fuera de España—, o la igualdad en el campo público. También aparecen consignados deberes: el tributario y la defensa de la patria con las armas. La diversidad salta a la vista. Esta Constitución armaba ciudadanos de verdad, no sucedáneos. Ciudadanos que pensaban por sí mismos y que estaban en condiciones de actuar políticamente como hasta entonces no había acontecido. Lo relevante, decía, no es eso. Es el ambiente. Es el contexto. Es la nueva dinámica constitucional. Es la lectura. Es la cultura jurídica edificada a su alrededor. No tanto cuántos derechos, en qué cantidad, sino el cómo de los mismos. Su esencia propiamente dicha.

Importa la cantidad, mas no solo. Lo relevante también es la calidad de esas facultades y atributos bajo el siguiente marco general: se puede decir que la Constitución de 1869³² diseña un escenario de derechos y libertades que opera como un contrapunto respecto a la imagen de los mismos suministrada por el Moderantismo constitucional dominante. Veamos cómo se hace.

I. Para tal fin, se incrementa el número de libertades, se redactan los artículos con detalle, detenimiento y precisión para delimitar a la perfección el modo en que pueden operarse restricciones sobre los citados derechos sin dejarlo al criterio de los agentes públicos, derechos nunca absolutos, lo que implícitamente nos da a entender que los liberales septembristas presentaban ya una concepción avanzada de la Constitución como norma jurídica preponderante —no simple ley, sino algo más— y de directa aplicación. Ya no era la ley la dirección hacia la cual mirar, sino la propia Constitución el referente. Toda la construcción garantista de los derechos y libertades se hace dejando traslucir los abusos y arbitrariedades de los Gobiernos anteriores por lo que se excluye la acción directa del Ejecutivo y se le hace responsable de las acciones u omisiones desarrolladas en confrontación con los estatutos jurídicos básicos de los ciudadanos. Hay que poner freno a tales comportamientos previos y reiterados. La técnica normativa avanza para precisar y detallar cuándo comparecen los excesos y cuándo nos hallamos ante restricciones toleradas y consentidas de los citados derechos. Pero lo hace la Constitución. No se espera a la ley. Lo hace, en suma, la Nación a través de ese instrumento normativo claramente superior en clave ciudadana³³.

³² Archivo del Congreso de los Diputados. P-0004-00012, *Constitución de la Nación Española. Promulgada el día 6 de Junio de 1869*, por donde se cita.

³³ Algunas referencias a los más interesantes debates en textos coetáneos: Mañas, 1869; Cambroner, s/a, pp.

Así, se comienza, en el artículo 2, afirmando el principio de legalidad, salvaguardia primera y básica de la libertad individual: nadie, ni español, ni extranjero, podrá ser detenido o preso sino por causa de delito. De inmediato, avanzada esta posibilidad negativa, se alzan las garantías. Es el artículo 3 quien nos habla: el sujeto afectado deberá ser puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial en el plazo de veinticuatro horas a partir del momento de la detención. En otro plazo un poco más extenso (setenta y dos horas), el juez competente, a quien se haya entregado el detenido, determinará la libertad o la prisión por medio de providencia que se notificará al interesado. La prisión, estado siguiente, superior y más grave a la simple detención, será decretada por mandamiento del juez competente, un auto que deberá ser ratificado o revisado, con audiencia del reo, en esas setenta y dos horas siguientes al ingreso en prisión, conforme dispone el artículo 4. La protección se extiende luego, en el artículo 5, al domicilio de españoles y extranjeros, lugares sacrosantos donde nadie puede entrar sin su consentimiento, salvo en casos urgentes y excepcionales —incendio, inundación, peligros análogos o agresión ilegítima procedente del interior, o para auxiliar a la persona que desde allí pida socorro—. Por tanto, solo el titular del domicilio puede dar permiso para entrar en el mismo. Si esto no se produce, la entrada en ese lugar, así como el registro de papeles y efectos, solo podrá hacerse por orden de juez competente y, en todo caso, de día. Ese registro asimismo se garantiza con la presencia del interesado o un individuo de su familia o, en su defecto, dos testigos vecinos del mismo pueblo. Tal carácter sacro de la vivienda se pierde en otro caso puntual: con ocasión de la persecución de un delincuente hallado *in fraganti*, asediado por la autoridad o sus agentes, que se refugia en el citado domicilio propio. En este supuesto, se podrá penetrar en la mentada residencia solamente para la aprehensión. Exclusivamente en ese caso. Si fuese vivienda ajena, será preciso requerirlo al dueño. Culmina este primer diseño de la libertad individual con dos importantes indicaciones aseguradoras de la incolumidad personal: ningún español (no los extranjeros) podrá ser compelido a mudar de domicilio o residencia, salvo por sentencia ejecutoria (artículo 6), y bajo ningún concepto la autoridad gubernativa podrá detener o abrir la correspondencia postal o telegráfica, salvo en virtud de auto de juez competente que ordene su control y su apertura en presencia del procesado (artículo 7). De nuevo, los jueces en acción para velar por los derechos y por sus legítimas modulaciones aplicativas. También por sus fronteras.

Hay, pues, un intento de mejorar la protección, delimitando lo que se puede o no hacer en estos contextos, un claro deseo de apartar a la autoridad

30-88; y *Antología de las Cortes Constituyentes*, 1913, I, pp. 759-818.

gubernativa —en contra de lo que había sucedido en los años anteriores—, y una voluntad firme y decidida para que todas estas acciones de restricción legítima fuesen siempre controladas o autorizadas por la autoridad judicial y nunca por oficiales ejecutivos o gubernativos. El juez decide el alcance de esta libertad personal y de esta inmunidad domiciliaria, conforme a los patrones que le marca el texto constitucional y eventualmente la ley, pero con supeditación a las pautas que el primero le traza. Es aquel quien limita este derecho en sus respectivos contextos. El Gobierno no puede intervenir en esta sensible cuestión para nada. La experiencia había mostrado claramente los riesgos de tal atribución.

El avance en la regulación es claro. Tanto que, de inmediato, el artículo 8 introduce una serie de precisiones y no de escaso valor. Nuevos vocablos se declinan, como justificación, responsabilidad en sentido amplio o indemnización: esos autos judiciales de prisión, registro o detención han de ser motivados, es decir, la acción del juez no puede ser arbitraria, sino que tiene que estar justificada, plenamente fundada. Aparece otra innovación relevante en caso de que no se den estos presupuestos: la responsabilidad de las partes públicas actuantes que se excedan de esos límites constitucionales y, como reparación de estos, la obligación de indemnizar, sin perjuicio de las posibles consecuencias penales que se pueden derivar de todas esas acciones u omisiones que afectan a la libertad individual. Si se exige esa responsabilidad a los agentes gubernativos, con mayor motivo se va a exigir a los jueces como nuevos protagonistas principales de la obra constitucional. El aparato judicial debe dar ejemplo. De este modo, si el auto judicial careciese de motivación o si los motivos fuesen ilegítimos o notoriamente insuficientes, esa persona presa o con prisión no ratificada en el plazo señalado por la Constitución, o cuyo domicilio fuese allanado o su correspondencia detenida, tendrá derecho a reclamar del juez que haya dictado el auto una indemnización proporcional al daño causado —nunca inferior a quinientas pesetas, según señala el artículo 8 en su primer párrafo—. Asimismo, los agentes de la autoridad pública (se entiende que no judiciales) estarán sujetos a indemnización fijada por el juez cuando reciban en prisión a cualquier persona sin mandamiento y sin auto motivado, o cuando la retengan, si ese auto no ha sido ratificado en tiempo legal. En el caso de la autoridad gubernativa y para curarse en salud respecto a prácticas que parecían haber sido regulares antaño, se indica asimismo que cualquier infracción de los ya citados artículos 2, 3, 4 y 5, dará origen a posibles delitos de detención ilegal o allanamiento de morada, con posibilidad asimismo de indemnización.

El poder deja de ser intocable e irresponsable, sobre todo, en un tema tan determinante como el de los derechos y libertades. Ese poder actúa, pero lo hace con responsabilidad y con posibles consecuencias económicas y criminales

para sus agentes, tanto judiciales como gubernativos. Hay unos protocolos a seguir y una primera Ley de Enjuiciamiento Criminal en 1872 ratificará todo esto. Más adelante se verá que los tiempos de la inmunidad han tocado a su fin: los agentes pueden ser perfecta y plenamente responsables de sus conductas abusivas o directamente delictivas. No hay escudos. Por fin, el detenido al que no se le hayan aplicado las prescripciones del *habeas corpus* del artículo 3, también tendrá derecho a la indemnización, apareciendo el juez como responsable principal, si no elevase a prisión la detención dentro del plazo establecido. El aseguramiento era total. Lo reitera el artículo 12: si no se cumplen estas formalidades en la detención o prisión o fuera de los casos constitucionalmente previstos, toda persona, por sí o por otro, podrá solicitar su inmediata puesta en libertad. Una ley regulará la forma de proceder sumariamente y las penas personales y patrimoniales dirigidas a quien haya ordenado, ejecutado o hecho ejecutar la detención o prisión ilegal. Un *favor libertatis* marca esos nuevos caminos. No solo hay una mayor amplitud de la libertad; su protección es también más completa, detallada y garantista. Es mejor en la teoría y en la práctica. Aseguramiento que se extiende al proceso en virtud del artículo 11: todo español tiene derecho a ser juzgado y sentenciado por juez o tribunal natural, fijado por leyes anteriores a la comisión del delito y de conformidad con los criterios que esas mismas leyes determinen. Se están prohibiendo, como indica la Constitución a renglón seguido, tribunales extraordinarios o comisiones especiales. El Poder Judicial recibe, pues, otro espaldarazo para la tutela de derechos: solo los jueces y tribunales ordinarios, los que integran la única jurisdicción o fuero común, asimismo conforme al artículo 91, podrán llevar a la práctica esa misión superior restrictiva cual es el castigo de delitos.

Hecha la defensa de la libertad personal, de esa seguridad privada o particular, de esa incolumidad de la persona misma y de su domicilio como ambiente o espacio de expansión más próximo, toca el turno al otro gran derecho liberal: la propiedad privada. Su regulación no sorprende, por tanto. Está en la línea de la defensa de derechos civiles en la que se embarca el liberalismo desde sus primeras manifestaciones y que no se pierde por el camino. Nadie, proclama el artículo 13, podrá ser privado, temporal o perpetuamente, de sus propiedades (bienes y derechos), ni turbado en la posesión, salvo por sentencia judicial. De nuevo, el juez es la medida del derecho dominical, su regulador, su protector y su delineante. El reverso hace aparecer la responsabilidad personal e intransferible de los funcionarios públicos que, bajo cualquier pretexto, infrinjan esta disposición. Los únicos casos exceptuados coinciden con aquellos enumerados hace un rato en el artículo 5, en relación a la posibilidad de irrumpir en el domicilio de un ciudadano sin autorización judicial: incendio, inundación, casos urgentes análogos, en que por la ocupación se haya de evitar un peligro al propietario o

poseedor, o evitar o bien atenuar el mal que se temiere o hubiere sobrevenido. Casos extraordinarios, por tanto, que no se consideran atentatorios al derecho dominical o a su simple expresión fáctica, sino, al contrario, proclives a defender esos derechos todos por medio de intervenciones especialmente justificadas en aras del interés colectivo. Del mismo modo, nadie podrá ser expropiado de sus bienes, salvo por causa de utilidad común y en virtud de mandamiento judicial, que no será ejecutado hasta que no se fije por el juez la indemnización con audiencia del interesado. Estamos en el artículo 14. De nuevo, el juez —que no la Administración— es instrumento de protección para modular el alcance de la propiedad y con pronunciamiento expreso sobre pertinencia y valor de la labor expropiatoria. El siguiente artículo nos conduce a la afirmación de los deberes tributarios, reverso de la propiedad o sacrificio de la misma en aras del interés público: solo estarán obligados a pagar aquellas contribuciones votadas en Cortes o establecidas por las corporaciones populares legalmente autorizadas para imponerlas —con remisión obligada al artículo 50, al artículo 99, núm. 5 y a los artículos 100-105 de la misma Constitución—. El cobro asimismo deberá hacerse del modo fijado por la ley. Cualquier desvío del poder en estos casos, es decir, aquel funcionario público que intente exigir o exija el pago de una contribución sin los requisitos indicados, incurrirá en delito de exacción ilegal. Mayor contundencia no es posible.

2. Fijados los dos derechos civiles más relevantes, los que fundan y aseguran la sociedad, se da paso a un nuevo componente jurídico: los derechos políticos, los derechos y libertades positivos que implican acceder al Estado, a la formación de su voluntad, a participar en la toma de decisiones colectivas. Garantizada la inmunidad personal y familiar, también la patrimonial, el ciudadano da el salto hacia la arena pública. Sale de su reducto particular y se lanza al ágora. Aquí aparecen novedades sobresalientes, que no habíamos hallado en los precedentes textos constitucionales, algo perfectamente silenciado por esa idea pasiva de la ciudadanía, eminentemente social y nunca política. Sus destinatarios serán los españoles por esa concepción de pertenencia a la comunidad política, no los extranjeros, con peso de la condición civil previa determinada por libertad y propiedad, como ya se ha visto. El primero es el voto (artículo 16). El sufragio, del que nadie en plenitud de derechos civiles, los anteriormente expuestos, puede ser privado para cualquier suerte de votación, y que, conforme al proceso constituyente previo, se presume universal, inaugura este nuevo discurso ciudadano, para dar paso de inmediato al artículo 17 donde, en formulación negativa —no podrá ser privado ningún español, es decir, afloran como naturales por mandato de la Constitución y sin esperar ninguna ley articuladora posterior—, se afirman libertad de ideas y de opiniones, oral y escrita, con la referencia ineludible a la imprenta o procedimiento semejante; libertad de reunión pacífica; libertad de

asociación para todos los fines de la vida humana que no sean contrarios a la moral pública; y, por último, el derecho de petición individual o colectiva a las Cortes, al rey o a las autoridades en general. Su estado ideal y regular es la existencia; lo excepcional es la limitación o reducción en casos claramente establecidos. La afirmación frente a la negación. Derechos ampliamente tipificados y concebidos, si bien sometidos de inmediato a las restricciones que fija el texto constitucional, que no espera a la ley para trazar los límites inherentes a un escenario coherente de libertades: la reunión se somete a las disposiciones de policía, al mismo tiempo que las celebradas al aire libre o las manifestaciones políticas solamente podrán desarrollarse de día (artículo 18). La asociación, cuyos individuos delinquieren por los medios que la misma proporcione, podrá ser disuelta por decisión del juez o ser suspendida por la autoridad gubernativa, remitiendo a los reos al juez competente. En caso extremo, cualquier asociación cuyo objeto o cuyos medios comprometan la seguridad del Estado, podrá ser disuelta por medio de una ley (artículo 19). El derecho de petición se impide colectivamente a cualquier clase de fuerza armada, mientras que a los individuos que formen parte de una de ellas se les aplicarán las leyes de su instituto, en cuanto tengan relación con este (artículo 20). El artículo 55 abunda en esta dirección, afectando a petición y a reunión: no se podrán presentar en persona, individual o colectivamente, peticiones a las Cortes y tampoco podrán celebrarse, cuando estas estén abiertas, reuniones al aire libre en las inmediaciones de sus respectivos edificios. No hay libertades absolutas, por tanto. Todas tienen unos límites que encaja o prescribe la Constitución misma.

Siguen la libertad religiosa en el artículo 21, no obstante la protección dispensada al culto y ministros de la religión católica, libertad que se brinda, en una extraña redacción, primeramente a los extranjeros y luego a algunos españoles, sin más limitaciones que las reglas universales de lo moral y de lo jurídico. Ahí está otro elemento básico de estos tiempos revolucionarios que permiten la eclosión de nuevas conciencias, de conformidad con los nuevos tiempos, aunque con peso del antiguo catolicismo nacional³⁴. Directo resultado de aquellos momentos serán el artículo 24, para la libertad educativa —todo español podrá fundar y mantener establecimientos de instrucción o de educación, sin previa licencia, salva la inspección de la autoridad competente por razones de higiene y moralidad—, y el artículo 27, con su amplia declaración de la igualdad de todos los españoles para ser admitidos en empleos y cargos públicos, según mérito y capacidad, en donde se puede leer, en el párrafo 2º, que la obtención y desempeño de estos empleos y cargos, así como la adquisición y ejercicio de los derechos

³⁴ Petschen, 1976; Cárcel Ortí, 1979.

civiles y políticos, son independientes de la religión que profesen los españoles. Todos los derechos, pues, se emancipan de cualquier reminiscencia religiosa o teológica en cuanto a su nacimiento y a su ejercicio, incluso podríamos decir en cuanto a su origen, puesto que salen del reducto de lo católico y se incorporan a un escenario más global, más humanista, más plural, que el que hasta entonces se había disfrutado. Se someten a los tribunales ordinarios y a las leyes comunes los delitos cometidos con ocasión del ejercicio de estos derechos (artículo 23), mostrando así su ausencia de especialidad, su carácter común, regular, fundamental, que se corresponde con una normal aplicación de las disposiciones al respecto; se reconoce a los extranjeros la libertad para establecerse en territorio español, ejercer su industria o dedicarse a cualquier profesión para cuyo desempeño no exijan las leyes títulos de aptitud expedidos por las autoridades españolas (artículo 25), de conformidad con ese deseo de equiparación entre nacionales y extranjeros a los efectos de defender, una vez más, esa universalidad de los derechos y libertades allí consignados —con alguna restricción evidente: artículo 27, párrafo 3º: el extranjero que no estuviese naturalizado no podrá ejercer en España cargo alguno que tenga aneja autoridad o jurisdicción—; y, por supuesto, también se reconoce a los españoles, en pleno goce de los derechos civiles —otra vez: libertad y propiedad, orden, familia, estatutos singulares—, la facultad para salir libremente del territorio, para trasladar su residencia y haberes al extranjero, salvas las obligaciones de contribuir al servicio militar o al mantenimiento de las cargas públicas (artículo 26), todo ello en relación con los deberes fiscales y militares generales (artículo 28).

3. Pero hay más. A mi juicio y en un orden de consideraciones ya planteado, además de amplitud de miras y de números, además de responsabilidades e indemnizaciones, además del papel de jueces y magistrados y del apartamiento del Gobierno y de sus oficiales de este campo tan delicado, hay dos elementos capitales en la regulación de los derechos y libertades en el texto de 1869 que lo hacen diferente desde la óptica constitucional. De un lado, el artículo 22, donde se fija ese carácter ilegislable de los estatutos allí reconocidos³⁵. Ni por leyes, ni por autoridades se podrá establecer disposición preventiva alguna que se refiera al ejercicio de estos derechos. La praxis de esos derechos y libertades es prácticamente absoluta, libre e irrestricta, y no podrá hacerse con carácter previo ninguna restricción a la misma. No cabe la prevención, sino solamente la represión —algo en lo que abunda el artículo 23 ya mencionado: aplicación de leyes comunes y tribunales ordinarios a los delitos cometidos en el ejercicio de estos derechos—, lo que quiere decir que, desde el instante mismo en que se procede a su

³⁵ Para su discusión, *DSCC*, núm. 68, 7/5/1869, pp. 1.670-1.685.

reconocimiento constitucional, toda autoridad ha de aceptar estas libertades concretas y no podrá modular su ejercicio de modo previo al mismo, solamente *a posteriori* y en aplicación de la legislación común. Con esto no se quiere decir que sean ilegislables, como algunos diputados defendieron en el debate constituyente, sino que la ley tiene que regular con carácter de represión la línea evolutiva de estos derechos. Su aplicación práctica es ilimitada tras su encaje constitucional, dejando a la ley la posibilidad de modular ese ejercicio en su desarrollo ulterior. No cabe anularlos. No cabe aniquilarlos. Rigen desde la Constitución y con el contenido mínimo que de la Constitución se desprenda a la luz de la necesaria intervención judicial, la cual toma la palabra en este silencio. No cabe que la ley regule los momentos previos a esos derechos, ni tampoco la autoridad, especialmente, la administrativa o gubernativa. En ese escenario previo, campan a sus anchas. Podrán ser controlados después, pero nunca antes. O, como diría S. Moret, podría legislarse sobre su ejercicio, sobre su efectividad, pero no sobre su esencia, sobre su naturaleza: ahí no llega el legislador, pero sí al primer campo a los efectos de marcar las condiciones bajo las cuales el derecho o la libertad va a ser materializado³⁶. Libertad máxima, por ende, hasta los límites que se deriven de la configuración constitucional y con los parámetros que en la propia Constitución se fijan, amén de su práctica y ejercicio. El ejemplo arquetípico lo indica la misma Constitución en el párrafo 2º de este artículo 22: no podrá establecerse censura, depósito, ni editor responsable para los periódicos. Se maximiza así la libertad de expresión que queda libre de ataduras previas en el momento de difundir ideas y opiniones. Otra cosa será lo que suceda después de la publicación. Antes no hay control o censura posibles. Y no solo eso.

Hay otro elemento reseñable que abunda en la línea iushumanista apuntada más arriba: el artículo 29, con reminiscencias norteamericanas, esto es, iusnaturalistas más puras que las conocidas en estos pagos por escasamente católicas³⁷, declaraba el carácter abierto de la lista de libertades allí fijada. La enumeración de los derechos consignados en este título no implicaría la prohibición de cualquier otro no consignado expresamente. No por silenciar un derecho se postergaba el mismo. El silencio no presuponía ignorancia, sino posibilidad de incorporación posterior. Los derechos naturales podían convertirse en derechos constitucionales, mas no se agotaban en el texto de 1869, el cual había recogido una parte de ese elenco natural. En lo sucesivo, la lista podría crecer e incrementarse.

³⁶ DSCC, núm. 51, 16/4/1869, p. 1.093. Si no fueran legislables, concluye, los derechos individuales simplemente no existirían y pone el ejemplo de la seguridad. Se llevará a la práctica de conformidad con lo que marque la ley, la cual habrá de acoplarse a lo que diga asimismo la Constitución.

³⁷ Oltra, 1972, pp. 106-116 y pp. 119-121, con el problema subyacente de la esclavitud.

La apertura era síntoma claro de Modernidad y de una concepción evolutiva, nada estática, del orden jurídico³⁸.

4. Por fin, el estricto control del Poder Ejecutivo, auténtico poder eminente en tiempos moderados, se traduce en una limitación amplia de sus facultades, en dos direcciones. De un lado, se termina con la tradicional irresponsabilidad de la Administración. Así, el artículo 30 pone fin a la exigencia de autorización de los funcionarios públicos para ser procesados ante los tribunales ordinarios por cualquiera que fuese el delito cometido. El mandato del superior no eximirá de responsabilidad cuando haya violación manifiesta, clara y terminante de cualquier precepto constitucional —en los demás casos, solamente a los agentes que no ejerzan autoridad—, algo que refrenda el artículo 92 para no aplicar reglamentos generales, provinciales o locales que no estén conformes con las leyes por parte de jueces y tribunales —en relación asimismo con el artículo 75: al rey corresponde hacer reglamentos para el cumplimiento y aplicación de las leyes, previos los requisitos que las mismas señalen—. La Administración ha de actuar con respeto a la jerarquía normativa y con eventual responsabilidad, si no lo hace así. De otro, la suspensión de algunos de los derechos y libertades, algo que devino usual, frecuente en tiempos moderados, aprovechándose de la escasez constitucional al respecto: el artículo 31 daba un giro a esta tendencia, marcando cuáles era las garantías que podían ser suspendidas —las de los artículos 2, 5, 6 y 17, párrafos 1º, 2º y 3º—, en todo o en parte de la Monarquía, siempre de forma temporal y por medio de una ley, cuando así lo exigiese la seguridad del Estado en circunstancias extraordinarias. La ley de suspensión dará pie a que se aplique la Ley de Orden Público, aprobada anteriormente, una ley que debería elaborarse con ciertas prescripciones y mandatos imperativos: no se podrán suspender más garantías que las consignadas anteriormente, ni autorizar al Gobierno para extrañar del reino o deportar a los españoles, o para desterrarlos a distancia de más de doscientos cincuenta kilómetros de su domicilio. Por fin, los jefes militares o civiles no podrán establecer otra penalidad que la que se haya fijado previamente en la ley indicada. Estos mandatos se materializan el 23 de abril de 1870 en la ley reclamada, aunque se tuvieron en cuenta muchas prácticas espurias de tiempos moderados y la ley no respira aires plenamente constitucionales, traicionando incluso su espíritu. Lo relevante era la intención constituyente, que luego se atasca en el templo de la ley: más garantías y menos discrecionalidad del Go-

³⁸ Para su discusión, partiendo de su redacción inicial («Será lícito todo lo que no esté expresamente prohibido por la Constitución y las leyes»), *DSCG*, núm. 70, 10/5/1869, pp. 1.792-1.798, con la cuestión de la esclavitud y la redacción final debida a la enmienda de S. Moret.

bierno, a partir de un sistema de doble legislación, evitaban la suspensión reiterada de los derechos y libertades, que pasaban a ser así lugares naturales y cotidianos para los españoles y también para los extranjeros en algunos supuestos³⁹.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Como reflexión final, así, con esta visión acelerada del primero de los títulos de la Constitución, quedaba afirmada una nueva ciudadanía, en cuyo auxilio venía, de inmediato, una parte institucional u orgánica que dividía poderes por vez primera en nuestra Historia Constitucional, que fortalecía el Parlamento, reducía la función del rey, afirmaba autonomía provincial y municipal, contaba con América, y, en fin, contemplaba la Constitución como algo nuevo, como un dispositivo capaz de inaugurar un tiempo de cambios. Los derechos y libertades se reconocían, pero, al mismo tiempo, la maquinaria estatal se situaba en una posición de defensa o aseguramiento de tales estatutos, no de ataque, no de agresión. Libertad y Poder iban de la mano y no se movían en posiciones antitéticas. Y de la mano de los derechos y las libertades, un nuevo discurso de responsabilidad de las autoridades y de indemnizaciones para hacer frente a los daños, de control judicial de las restricciones legítimas a esos derechos y libertades, de exclusión de los agentes del Ejecutivo en tales lides, de suspensiones más controladas y sometidas a una dúplice legalidad, y, sobre todo, de derechos y libertades que no admitían en su perjuicio disposiciones preventivas de ninguna clase —solo represivas—, en cuanto a su ejercicio regular, todo en un escenario final de cuasi iusnaturalismo —por cuanto que los derechos y libertades enumerados no agotaban la materia: los no citados tenían reconocido un puesto en el futuro dentro de ese elenco constitucional. La lista era, pues, abierta—.

El problema fue que una cosa es lo que dicen las leyes y otra lo que los hombres disponen⁴⁰. Los perfiles revolucionarios de 1868 no consiguieron evaporarse: esa tendencia anárquica arruinó la obra constitucional y trajo simple y llanamente el caos. Un caos del que solamente nos sacaría, curiosamente, la Restauración moderada. Así suceden las cosas, paradójicamente, en este país. El texto más completo y más perfeccionado para los derechos y libertades provocó acaso una apertura tal de la libertad, una explosión inesperada e inusitada de la misma, que trajo consigo indigestión en un pueblo poco acostumbrado a disfrutarla, y se llevó por delante todo lo que encontró a su paso. El empacho se tuvo que combatir con una vuelta a la ortodoxia moderada, corregida y mejorada, lo mejor para el régimen y para la dieta, a lo que parece ser. El Moderantismo volvía

³⁹ Cruz Villalón, 1980, pp. 399-429.

⁴⁰ Bolaños Mejías, 1997.

a triunfar. Eso es, en suma, el siglo XIX: un Moderantismo con distintos nombres y variados ropajes. Eso es, en suma, la España constitucional de esta centuria, tan cerca a los poderes como lejana a los hombres, aunque en 1869 se intentase, como aquí se ha argumentado, revertir esta tendencia.

BIBLIOGRAFÍA

- Abellán, José Luis, *Historia crítica del pensamiento español. 4. Liberalismo y Romanticismo (1808-1874)*, Madrid, Espasa Calpe, 1984.
- Alcalá Galiano, Antonio, *Lecciones de Derecho Político*, estudio preliminar de Ángel Garrorena Morales, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984.
- Alejandro García, Juan Antonio, *Temas de Historia del Derecho: Derecho del Constitucionalismo y la Codificación. I*, Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1978.
- Alonso, Gregorio, *La nación en capilla. Ciudadanía católica y cuestión religiosa en España, 1793-1874*, Granada, Editorial Comares, 2014.
- Álvarez Alonso, Clara, «Los derechos y sus garantías (1812-1931)», *Ayer*, 4, 1999, pp. 177-216.
- Álvarez Cora, Enrique, «Los derechos naturales entre Inquisición y Constitución», *Res Publica. Revista de Historia de las Ideas Políticas* 18, 1, 2015, pp. 11-26.
- Álvarez Junco, José, *Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX*, Madrid, Taurus, 2001.
- Andreu Miralles, Xavier, *El descubrimiento de España. Mito romántico e identidad nacional*, Barcelona, Taurus, 2016.
- Antología de las Cortes Constituyentes de 1869 y 1870 (Obra en tres volúmenes)*, compilada en la parte de documentación oficial por D. F. De Cuéllar, con introducción, juicios y notas de D. Julio Burell, según el encargo del Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados, Madrid, Talleres Tipográficos de La Mañana, 1913, 3 vols.
- Antón, Joan y Miquel Caminal (coords.), *Pensamiento político en la España contemporánea (1800-1950)*, Barcelona, Teide, 1992.
- Artola Gallego, Miguel, *El modelo constitucional español del siglo XIX*, Madrid, Fundación Juan March, 1979.
- Artola Gallego, Miguel, *Partidos y programas políticos, 1808-1936. I. Los partidos políticos*, Madrid, Alianza Editorial, 1991.
- Astarloa Villena, Francisco, «Los derechos y libertades en las constituciones históricas españolas», *Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)* 92, 1996, pp. 207-250.
- Baldó Lacomba, Marc, «Las raíces sociales de la revolución gloriosa. Reflexiones para un debate», en *Antiguo Régimen y liberalismo. Homenaje a Miguel Artola. 2. Economía y Sociedad*, ed. Javier M. Donézar y Manuel Pérez Ledesma, Madrid, Alianza Editorial, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 1995, pp. 399-412.
- Bilbao Ubillos, Juan María, *Leyes Políticas Españolas, 1808-1978. V. Derechos y libertades*, Madrid, Iustel, 2015.
- Bolaños Mejías, Carmen, «Falseamiento de los principios liberales en la legislación del Sexenio Revolucionario», *Revista de Derecho Político*, 43, 1997, pp. 159-173.
- Bolaños Mejías, Carmen, «Soberanía nacional y soberanía compartida en la estructura política de la Constitución de 1869», *Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED*, 13, 1998, pp. 183-199.
- Bozal Fernández, Valeriano (ed.), *Juntas revolucionarias. Manifiestos y proclamas de 1868*, Madrid, Editorial Cuadernos para el Diálogo, 1968.
- Burdiel, Isabel y Manuel Pérez Ledesma (coords.), *Liberales, agitadores y conspiradores. Biografías heterodoxas del siglo XIX*, Madrid, Espasa Calpe, 2000.
- Calero, Antonio María, «Introducción. La teoría de la Monarquía Democrática en las Cortes Constituyentes de 1869», en [Discursos Parlamentarios], *Monarquía y Democracia en las Cortes de 1869*, ed. Antonio María Calero, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1987, pp. IX-XLVIII.
- Cambroner, Carlos, *Las Cortes de la Revolución por Carlos Cambroner. Contienen la reseña de las discusiones borrascosas, de los discursos notables y de los incidentes curiosos ocurridos en el Congreso de los Diputados desde el 11 de Febrero de 1869 hasta el 3 de Enero de 1874*, Madrid, Biblioteca de Jurisprudencia, Filosofía e Historia, La España Moderna, s. a.
- Cánovas Sánchez, Francisco, *El Partido Moderado*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1982.

LA NUEVA VIDA CONSTITUCIONAL EN 1869

- Cánovas Sánchez, Francisco, *El Moderantismo y la Constitución Española de 1845*, Madrid, Fundación Santa María, 1985.
- Cárcel Ortí, Vicente, *Iglesia y revolución en España (1868-1874)*, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1979.
- Carro Martínez, Antonio, *La Constitución española de 1869*, Madrid, Ediciones de Cultura Hispánica, 1952.
- Ciudadanos. *El nacimiento de la política en España (1808-1869)*, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, Ministerio de Cultura, Consorcio para la Conmemoración del Bicentenario de Constitución de 1812, 2008.
- Clavero, Bartolomé, *Evolución histórica del constitucionalismo español*, Madrid, Editorial Tecnos, 1984.
- Clavero, Bartolomé, *Manual de historia constitucional de España*, Madrid, Alianza Editorial, 1989.
- Clavero, Bartolomé, «Por una historia constituyente: 1869, de los derechos a los poderes», *Revista del Centro de Estudios Constitucionales*, 7, 1990, pp. 79-97.
- Clavero, Bartolomé, *Razón de Estado, Razón de Individuo, Razón de Historia*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991.
- Clavero, Bartolomé, *Los derechos y los jueces*, Cizur Menor, Thomson Reuters - Editorial Aranzadi, 2016.
- Colomer Viadel, Antonio, *El sistema político de la Constitución española de 1837*, Madrid, Congreso de los Diputados, 1989.
- Colomer Viadel, Antonio, *Los liberales y el origen de la monarquía parlamentaria en España*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1993.
- Comellas, José Luis, *La teoría del régimen liberal español*, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1962.
- Comellas, José Luis, *Los moderados en el poder, 1844-1854*, Madrid, CSIC, Escuela de Historia Moderna, 1970.
- Constituciones españolas: 1808-1978*, ed. Javier Carlos Díaz Rico, Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, 2016.
- Costa, Pietro, *Civitas. Storia di la cittadinanza in Europa. 2. L'età delle rivoluzioni (1789-1848)*, Roma-Bari, Laterza, 2000.
- Craiutu, Aurelian, *Liberalism under Siege. The Political Thought of the French Doctrinaires*, Lanham, Oxford Lexington Books, 2003.
- Craiutu, Aurelian, *Le Centre Introuvable. La pensée politique des doctrinaires sous la Restauration*, Paris, Plon, 2006.
- Cruz Villalón, Pedro, *El Estado de Sitio y la Constitución. La constitucionalización de la protección extraordinaria del Estado (1789-1878)*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1980.
- Cruz Villalón, Pedro, «Formación y evolución de los derechos fundamentales», en *La curiosidad del jurista persa y otros estudios sobre la Constitución*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1999, pp. 23-53.
- De la Fuente Monge, Gregorio, «La Revolución de Septiembre de 1868 en España: estado de la cuestión», en *Populismo, caudillaje y discurso demagógico*, ed. José Álvarez Junco, Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, Siglo XXI, 1987, pp. 27-72.
- De la Fuente Monge, Gregorio, *Los revolucionarios de 1868. Elites y poder en la España liberal*, Madrid, Marcial Pons, 2000.
- De la Fuente Monge, Gregorio, «Actores y causas de la Revolución de 1868», en *España, 1868-1874. Nuevos enfoques sobre el Sexenio Democrático*, ed. Rafael Serrano García, Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 2002, pp. 31-57.
- De la Fuente Monge, Gregorio y Rafael Serrano García, *La revolución gloriosa. Un ensayo de regeneración nacional (1868-1874). Antología de textos*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2005.
- Díez del Corral, Luis, *El Liberalismo Doctrinario*, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1945.
- Donézar Díez de Ulzurrun, Javier M., *La Constitución de 1869 y la Revolución burguesa*, Madrid, Fundación Santa María, 1985.
- Donoso Cortés, Juan, *Lecciones de Derecho Político*, ed. José Álvarez Junco, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984.
- Eiras Roel, Antonio, *El Partido Demócrata español (1849-1868)*, Madrid, Ediciones Rialp, 1961.
- Elorza, Antonio, «Las ideas políticas», en *Enciclopedia de Historia de España dirigida por Miguel Artola. III. Iglesia. Pensamiento. Cultura*, Madrid, Alianza Editorial, 1989, pp. 127-211.
- Fernández Sarasola, Ignacio, «Concepto y modelos históricos de los derechos fundamentales», en *Teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución española de 1978*, Madrid, Editorial Tecnos, 2004, pp. 17-44.
- Fernández Sarasola, Ignacio, «Modelos históricos de fundamentación de los derechos», en *Homenaje al Profesor José Antonio Escudero. Tomo I*, Madrid, Editorial Complutense, 2012, pp. 539-551.

FAUSTINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ

- Fernández Segado, Francisco, «Pragmatismo jurídico y concertación política: dos ideas-clave en la obra de los constituyentes de 1837», *Revista de Derecho Político*, 20, 1983-1984, pp. 33-65.
- Fernández Segado, Francisco, *Las Constituciones históricas españolas (Un análisis histórico-jurídico)*, Madrid, Editorial Civitas, 1986.
- Fernández Segado, Francisco, «Las bases vertebradoras de la Constitución de 1837», *Hispania. Revista Española de Historia*, 166, 1987, pp. 679-744.
- Fioravanti, Maurizio, *Stato e Costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali*, Torino, G. Giappichelli, 1993.
- Fioravanti, Maurizio, *Appunti di storia delle costituzioni moderne. Le libertà fondamentali*, Torino, G. Giappichelli, 1995.
- Fioravanti, Maurizio, *Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones*, Madrid, Editorial Trotta, 2003.
- Fontana, Josep, «Cambio económico y crisis política», en *Cambio económico y actitudes políticas en la España del siglo XIX*, Barcelona, Editorial Ariel, 1983, pp. 97-145.
- García Fernández, Francisco Javier y Eduardo Espín Templado, *Esquemas del Constitucionalismo español (1808-1976)*, ed. Jorge de Esteban, Madrid, Facultad de Derecho, Universidad Complutense, 1976.
- García Pérez, Rafael D., «El Concordato de 1851», en *La Iglesia en la historia de España*, ed. José Antonio Escudero López, Madrid, Fundación Rafael del Pino, 2014, pp. 1.003-1.009.
- Garriga, Carlos (coord.), *Historia y Constitución. Trayectos del constitucionalismo hispano*, México, CIDE, Instituto Mora, El Colegio de Michoacán, Escuela Libre de Derecho, 2010.
- Garrorera Morales, Ángel, *El Ateneo de Madrid y la teoría de la Monarquía Liberal (1836-1847)*, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1974.
- Gómez Ochoa, Fidel, «El liberalismo conservador español del siglo XIX», en *Sagasta y el Liberalismo Progresista en España. Catálogo de la Exposición*, Logroño, Cultural Rioja, 2002, pp. 51-68.
- González Madrid, Damián A., Manuel Ortiz Heras y Juan Sisinio Pérez Garzón (eds.), *La Historia, lost in translation? Actas del XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea*, Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2017.
- González Rodríguez, Hortensia, «La forma de gobierno en el debate constituyente de 1869», *Revista de Derecho Político*, 55-56, 2002, pp. 365-410.
- Guereña, Jean-Louis, «El sexenio revolucionario en la historiografía (1968-1978)», en *Historiografía Española Contemporánea. X Coloquio del Centro de Investigaciones Hispánicas de la Universidad de Pau*, Madrid, Siglo XXI, 1980, pp. 147-174.
- Higueras Castañeda, Eduardo, *Con los Borbones, jamás. Biografía de Manuel Ruiz Zorrilla (1833-1895)*, Madrid, Marcial Pons, 2016.
- Ibán, Iván Carlos y Marcos González, *Textos de Derecho Eclesiástico (Siglos XIX y XX)*, Madrid, Boletín Oficial del Estado, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001.
- Jover, José María, «1868. Balance de una revolución», en *Política, diplomacia y humanismo popular en la España del siglo XIX*, Madrid, Ediciones Turner, 1976, pp. 345-363.
- La Parra López, Emilio, Manuel Pérez Ledesma, Jean-Philippe Luis et al., *El nacimiento de la política en España (1808-1869)*, Madrid, Editorial Pablo Iglesias, 2012.
- Lida, Clara E. e Iris M. Zavala (eds.), *La revolución de 1868. Historia, pensamiento, literatura*, New York, Las Americas Publishing Company, 1970.
- López Alonso, Carmen, «El pensamiento conservador español en el siglo XIX: de Cádiz a la Restauración», en *Historia de la Teoría Política. 5. Rechazo y desconfianza en el proyecto ilustrado*, ed. Fernando Vallespín, Madrid, Alianza Editorial, 2002, pp. 263-302.
- López-Cordón, María Victoria, *La revolución de 1868 y la I República*, Madrid, Siglo XXI, 1976.
- Lorente Sariñena, Marta, *La voz del Estado. La publicación de las normas (1810-1889)*, Madrid, Boletín Oficial del Estado, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001.
- Lorente Sariñena, Marta, Fernando Martínez Pérez y María Julia Solla Sastre, *Historia legal de la justicia en España (1810-1978)*, Madrid, Iustel, 2012.
- Lorente, Marta y José María Portillo (dirs.), *El momento gaditano. La Constitución en el orbe hispánico (1808-1826)*, Madrid, Congreso de los Diputados, 2011.
- Maestro Buelga, Gonzalo, «Derechos ilegislables y derechos contingentes en la Constitución de 1869», *Historia Contemporánea*, 12, 1995, pp. 279-308.

LA NUEVA VIDA CONSTITUCIONAL EN 1869

- Maestro Buelga, Gonzalo, «Los derechos públicos subjetivos en la historia del constitucionalismo histórico español del siglo XIX», *Revista de Derecho Político*, 41, 1996, pp. 119-175.
- Mañas, José María, *El libro del buen ciudadano (Repertorio del Derecho Político Español)*, Madrid, Imprenta de la Bib. Universal Económica, 1869, 2 vols.
- Marcuello Benedicto, Juan Ignacio, *La práctica parlamentaria en el reinado de Isabel II*, Madrid, Congreso de los Diputados, 1986.
- Marcuello Benedicto, Juan Ignacio, «Las Cortes y los factores de crisis política en la Monarquía de Isabel II (1845-68)», *Anuario de Historia del Derecho Español*, 58, 1988, pp. 81-172.
- Marcuello Benedicto, Juan Ignacio, «La práctica del poder moderador de la Corona en la época de Isabel II», *Revista de Estudios Políticos (Nueva Época)*, 55, 1989, pp. 197-236.
- Marcuello Benedicto, Juan Ignacio, «Sistema constitucional, práctica parlamentaria y alternativas conservadoras en el liberalismo isabelino», *Hispania. Revista Española de Historia*, 183, 1993, pp. 237-276.
- Marcuello Benedicto, Juan Ignacio, «Cortes y proceso político en la monarquía constitucional española: modelos liberales doceañista y moderado (1810-1868)», *Hispania. Revista Española de Historia*, 189, 1995, pp. 11-36.
- Marcuello Benedicto, Juan Ignacio, «La Corona y la desnaturalización del parlamentarismo isabelino», *Ayer*, 34, 1998, pp. 15-36.
- Marcuello Benedicto, Juan Ignacio, *La Constitución de 1845*, Madrid, Iustel, 2007.
- Martínez Cuadrado, Miguel, *Elecciones y partidos políticos de España (1868-1931)*. I, Madrid, Taurus, 1969.
- Martínez Gallego, Francesc A., *Conservar progresando: la Unión Liberal (1856-1868)*, Alzira, Fundación Instituto de Historia Social, 2001.
- Martínez Martínez, Faustino, «Repensar la Constitución de 1812: Cádiz o el imposible constituyente», *Historia et Ius. Rivista di Storia Giuridica dell'Età Medievale e Moderna*, 3, 2013, pp. 1-118.
- Martínez Martínez, Faustino, *La vuelta de tuerca moderada: el Proyecto de Constitución y Leyes Fundamentales de don Juan Bravo Murillo (Año 1852)*, Madrid, Editorial Dykinson, 2019.
- Martínez Yáñez, Nora María, «Los derechos fundamentales en la Constitución de 1845 y en sus proyectos de reforma», en *Los derechos en el constitucionalismo histórico español*, ed. Francisco Puy Muñoz, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela. Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 2002, pp. 83-109.
- Menéndez Alzamora, Manuel y Antonio Robles Egea (eds.), *Pensamiento político en la España contemporánea*, Madrid, Editorial Trotta, 2013.
- Miguel González, Román, *La Pasión Revolucionaria. Culturas políticas republicanas y movilización popular en la España del siglo XIX*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007.
- Moliner Prada, Antonio, «La España moderada en la Europa de su tiempo», *Spagna Contemporanea*, 28, 2005, pp. 1-28.
- Monerri Molina, Beatriz, *Las Cortes del Estatuto Real (1834-1836)*, Madrid, Editorial Dykinson, 2019.
- Moreno Luzón, Javier (ed.), *Progresistas. Biografías de reformistas españoles (1808-1939)*, Madrid, Taurus, 2006.
- Núñez Rivero, Cayetano y Rosa María Martínez Segarra, *Historia Constitucional de España*, Madrid, Editorial Universitas, 1997.
- Oliet Palá, Alberto, *El conflicto social y la legitimación de la monarquía ante la revolución de 1868*, Madrid, Centro de Publicaciones, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989.
- Ollero Vallés, José Luis, *El progresismo como proyecto político en el reinado de Isabel II: Práxedes Mateo Sagasta, 1854-1868*, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1999.
- Ollero Vallés, José Luis, *Sagasta, de conspirador a gobernante*, Madrid, Marcial Pons, 2006.
- Oltra, Joaquín, *La influencia norteamericana en la Constitución Española de 1869*, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1972.
- Pacheco, Joaquín Francisco, *Lecciones de Derecho Político*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984.
- Peña González, José, *Cultura política y Constitución de 1869. Las funciones de la Constitución*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2002a.
- Peña González, José, «La cultura política en el Sexenio», *Revista de Derecho Político*, 55-56, 2002b, pp. 33-105.
- Pérez Ayala, Andoni, «El constitucionalismo del Sexenio en el contexto constitucional europeo de mediados del siglo XIX. Referencia específica al influjo del modelo belga», *Revista de Derecho Político*, 55-56, 2002, pp. 241-293.
- Pérez Ledesma, Manuel, *La Constitución de 1869*, Madrid, Iustel, 2010.

- Pérez Ledesma, Manuel (dir.), *De súbditos a ciudadanos. Una historia de la ciudadanía en España*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007.
- Pérez Ledesma, Manuel e Isabel Burdiel (eds.), *Liberales eminentes*, Madrid, Marcial Pons, 2008.
- Pérez-Prendes Muñoz-Arraco, José Manuel, *Escritos de historia constitucional española*, Madrid, Fundación Seminario de Derecho Romano Ursicino Álvarez, Marcial Pons, 2017.
- Petschen, Santiago, *Iglesia-Estado. Un cambio político. Las Constituyentes de 1869*, Madrid, Taurus, 1976.
- Peyrou, Florencia, *Tribunos del pueblo. Demócratas y republicanos durante el reinado de Isabel II*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2008.
- Piqueras Arenas, José Antonio y Enric Sebastià Domingo, *Agiotistas, negreros y partisanos. Dialéctica social en visperas de la Revolución Gloriosa*, Valencia, Edicions Alfons El Magnànim, Institució Valenciana d'Estudis i Investigació, 1991.
- Piqueras Arenas, José Antonio, *La revolución democrática (1868-1874). Cuestión social, colonialismo y grupos de presión*, Madrid, Centro de Publicaciones, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1992.
- Pro, Juan, *El Estatuto Real y la Constitución de 1837*, Madrid, Lustel, 2010.
- Pro, Juan, *La construcción del Estado en España. Una historia del siglo XIX*, Madrid, Alianza Editorial, 2019.
- Rico Linage, Raquel, *Constituciones históricas. Ediciones oficiales*, Sevilla, Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones, 2010.
- Roldán Álvarez, María del Carmen, *Los derechos fundamentales en la cultura jurídica española: neotomismo y krausismo*, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho, Departamento de Filosofía Moral y Política, 1990.
- Romeo Mateo, María Cruz y María Sierra (coords.) *Historia de las Culturas Política en España y América Latina. II. La España liberal, 1833-1874*, Madrid-Zaragoza, Marcial Pons, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2014.
- Romero Moreno, José Manuel, *Proceso y derechos fundamentales en la España del siglo XIX*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983.
- Rosanvallon, Pierre, *El momento Guizot. El liberalismo doctrinario entre la Restauración y la Revolución de 1848*, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2015.
- Rovira Flórez de Quiñones, María Carolina, «Los derechos humanos en la Constitución de 1869», en *Los derechos en el constitucionalismo histórico español*, ed. Francisco Puy Muñoz, Santiago de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela. Servicio de Publicacións e Intercambio Científico, 2002, pp. 111-133.
- Rueda Hernanz, Germán, «La Constitución española de 1845 y la doctrina europea», en *El debate constitucional en el siglo XIX. Ideología, oratoria y opinión pública*, eds. José Antonio Caballero López, José Miguel Delgado Idarreta y Rebeca Viguera Ruiz, Madrid, Marcial Pons, 2015, pp. 115-128.
- Sagasta y el liberalismo español. *Catálogo de la Exposición*, Madrid, Fundación BBVA, 2000.
- Sánchez Agesta, Luis, *Historia del Constitucionalismo español (1808-1936)*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984.
- Sánchez García, Raquel, «El liberalismo español en el siglo XIX», en *Historia del Pensamiento Político Español. Del Renacimiento a nuestros días*, ed. Pedro Carlos González Cuevas, Madrid, UNED, 2016, pp. 111-135.
- Serrano, Rafael, «La historiografía en torno al Sexenio 1868-1874: entre el fulgor del centenario y el despliegue sobre lo local», *Ayer*, 44, 2001, pp. 11-32.
- Serván, Carmen, «Como losa de plomo: el derecho a la libre emisión del pensamiento en el constitucionalismo de 1869», en *Constitución en España: orígenes y destino*, ed. José María Portillo y José María Iñurrategui, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, pp. 397-423.
- Serván, Carmen, «La individualidad velada: titularidad de derechos en el ámbito doméstico bajo el orden constitucional de 1869», *Revista de Derecho Político*, 55-56, 2002, pp. 425-452.
- Serván, Carmen, *Laboratorio constitucional en España: el individuo y el ordenamiento, 1868-1873*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005.
- Solé Tura, Jordi y Eliseo Aja, *Constituciones y períodos constituyentes en España (1808-1936)*, Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1990.
- Solla Sastre, María Julia, «*Finales como principios. Desmitificando la Ley orgánica de tribunales de 1870*», *Anuario de Historia del Derecho Español* 77, 2007, pp. 427-466.
- Solla Sastre, María Julia, «La ley ignota. Reflexiones sobre el orden jurídico y la administración de justicia en la construcción de la España liberal (1835-1870)», en *Crossing Legal Cultures. European Forum of Young*

LA NUEVA VIDA CONSTITUCIONAL EN 1869

- Legal Historians*, ed. Laura Beck Varela, Pablo Gutiérrez Vega y Alberto Spinosa, München, Martin Meidenbauer Verlag, 2009, pp. 399-415.
- Souto Paz, José Antonio, «[Las libertades públicas en la Constitución de 1869](#)», *Revista de Derecho Político*, 55-56, 2002, pp. 107-158.
- Starzinger, Vincent E., *The Politics of the Center. The Juste Milieu in Theory and Practice, France and England, 1815-1848*, New Brunswick-London, Transaction Publishers, 1991.
- Suárez Cortina, Manuel (ed.), *Las máscaras de la libertad. El liberalismo español, 1808-1930*, Madrid, Marcial Pons, 2003.
- Suárez Cortina, Manuel, *La redención del pueblo. La cultura progresista en la España liberal*, Santander, Editorial Universidad de Cantabria, 2006.
- Tomás Villarroya, Joaquín, *El sistema político del Estatuto Real (1834-1836)*, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1968.
- Tomás Villarroya, Joaquín, «El proceso constitucional, 1834-1843» y «El proceso constitucional, 1843-1868», en *Historia de España fundada por Ramón Menéndez Pidal. XXXIV. La Era Isabelina y el Sexenio Democrático (1834-1874)*, Madrid Espasa Calpe, 1981a, pp. 5-67.
- Tomás Villarroya, Joaquín, «El proceso constitucional, 1843-1868», en *Historia de España fundada por Ramón Menéndez Pidal. XXXIV. La Era Isabelina y el Sexenio Democrático (1834-1874)*, Madrid Espasa Calpe, 1981b, pp. 198-370.
- Tomás Villarroya, Joaquín, «El Estado: el constitucionalismo español en el reinado de Isabel II», en *Historia General de España y América. XIV. La España liberal y romántica (1833-1868)*, Madrid, Ediciones Rialp, 1983, pp. 357-407.
- Tomás Villarroya, Joaquín, «Ilusión y frustración del constitucionalismo isabelino», en *El Estado Español en su Dimensión Histórica*, Barcelona, PPU, 1984, pp. 201-231.
- Tomás Villarroya, Joaquín, *El Estatuto Real de 1834 y la Constitución de 1837*, Madrid, Fundación Santa María, 1985.
- Tomás Villarroya, Joaquín, *Breve historia del constitucionalismo español*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2012.
- Tomás y Valiente, Francisco, «Los derechos fundamentales en la historia del constitucionalismo español», en *Códigos y Constituciones (1808-1978)*, Madrid, Alianza Editorial, 1989, pp. 153-173.
- Torres del Moral, Antonio, *Constitucionalismo histórico español*, Madrid, Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho, Universidad Complutense, 2009.
- Vallejo Fernández de la Reguera, Jesús, «[Ortografía y heterografía constitucionales \(1869\)](#)», *Anuario de Historia del Derecho Español*, 63-64, 1993-1994, pp. 615-700.
- Vallejo Fernández de la Reguera, Jesús, «[Orden, libertad, justicia. Figuración constitucional republicana \(1873\)](#)», *Anuario de Historia del Derecho Español*, 67, 1997, pp. 821-846.
- Vallejo Fernández de la Reguera, Jesús, «Aparato y comentario de la edición constitucional en el Sexenio», en *Constitución en España: orígenes y destino*, ed. José María Portillo y José María Iñurrategui, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1998, pp. 343-395.
- Varela Suanzes-Carpegna, Joaquín, «[La Constitución de 1837: una Constitución transaccional](#)», *Revista de Derecho Político*, 20, 1983-1984, pp. 95-106.
- Varela Suanzes-Carpegna, Joaquín, «[El sentido moral del pensamiento democrático español a mediados del siglo XIX](#)», *Revista de Derecho Político*, 55-56, 2002, pp. 13-32.
- Varela Suanzes-Carpegna, Joaquín, «La doctrina de la Constitución histórica en España», *Fundamentos. Cuadernos Monográficos de Teoría del Estado, Derecho Público e Historia Constitucional*, 6, 2010, pp. 307-359.
- Varela Suanzes-Carpegna, Joaquín, *Política y Constitución en España (1808-1978)*, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007.
- Varela Suanzes-Carpegna, Joaquín, *Historia constitucional de España*, ed. Ignacio Fernández Sarasola, Madrid, Marcial Pons, 2020.
- Vilches, Jorge, *Progreso y Libertad. El Partido Progresista en la revolución liberal española*, Madrid, Alianza Editorial, 2001.